

**SEXTA PARTE**

**LA SANGRIENTA REBELIÓN  
DE GIROLDI**



## I. Referencia a la intentona frustrada de 1988

Aunque la cronología de esta obra está centrada en la época de la contienda electoral de 1989 y en los hechos subsiguientes, conviene que, para una mejor comprensión de los problemas internos que venía confrontando la cúpula de la Narcodictadura dentro de los recintos amurallados de las Fuerzas de Defensa, nos ocupemos un tanto brevemente de la conspiración abortada que dirigió el coronel Leonidas Macías el 16 de marzo de 1988, si bien en la *Primera Parte* de este libro, bajo el título de *A un año de la rebelión cuartelaria abortada*, ya consignamos una serie de observaciones con respecto a la misma.

Las inesperadas acusaciones que en junio de 1987 formuló el coronel Roberto Díaz Herrera contra el general Manuel Antonio Noriega propiciaron que, como reacción, este último tratara de presentar a la oficialidad de las Fuerzas de Defensa como cuerpo que le apoyaba monolíticamente. En aquellos momentos, ya Noriega había consolidado su control interno, al menos aparentemente, en las filas castrenses. Decidió entonces que toda la oficialidad emitiera una declaración de repudio a Díaz Herrera y presentó a esa oficialidad, debidamente alineada, por la televisión, con el puño el alto, gritando "NI UN PASO ATRAS".

Sin embargo, continuaba el descontento en muchos oficiales, sobre todo porque los ascensos y traslados que estuvo efectuando Noriega, desde 1983 en adelante, no seguían el orden del escalafón, ni respetaban la antigüedad de servicios, sino que se hacían para robustecer el control norieguista, ascendiendo a aquellos oficiales que venían formando su círculo pretoriano e incondicional. En este clima, fue posible que el coronel Leonidas Macías, miembro del Estado Mayor y Jefe de Panamá-Policía, lograra organizar una conspiración contra Noriega, en la que estaban

comprometidos 15 altos oficiales, a más del jefe de la misma, algunos de ellos de gran capacidad y más o menos desvinculados de las corrupciones acostumbradas por los del círculo de allegados a Noriega. Ya sabemos que esta rebelión se frustró, muy posiblemente porque uno o dos oficiales la traicionaron, informándole a Noriega, quien la dejó desarrollarse hasta el minuto anterior a su ejecución, con lo que evitó ésta, no sin que se produjeran algunos disparos en el Cuartel Central del Chorrillo (o de la Avenida A, como también se le conoce), en las primeras horas de la mañana de aquel día.

Esos 16 altos oficiales sufrieron la aplicación de la medida disciplinaria consistente en destitución del cargo y un año de arresto, sin referirnos a las torturas y al trato enormemente cruel e inhumano que se les dispensó. Incluso hasta fueron enviados al penal de la Isla de Coiba; y cuando creyeron que por lo menos iban a gozar de libertad, cumplido el año de su arresto, el vengativo Narcodictador los puso a órdenes del Procurador General de la Nación (Lic. Carlos Villalaz), a fin de que éste les iniciara un proceso por delito contra la seguridad interna del Estado, con lo que continuarían en prisión, la que tuvo final con la invasión norteamericana de diciembre de 1989.

Más de una vez, públicamente y en seminarios internos de las Fuerzas de Defensa, el Narcodictador afirmó que los próximos conspiradores recibirían la máxima sanción (fusilamiento, según dijo el periodista Daniel Olonso, quien había escuchado esa palabra de labios de Noriega).

Para debelar esa intentona frustrada, en marzo de 1988, tuvo principal actuación la Compañía Urraca, jefaturada por el capitán Moisés Giroldi Vera, la que tenía a su cargo la seguridad del Cuartel Central, asiento de las principales oficinas de las Fuerzas de Defensa, comenzando por la Comandancia y el Estado Mayor. Se ha comentado que, en agradecimiento a su lealtad del 16 de marzo de 1988, Noriega ascendió a Giroldi a mayor, le obsequió una casa y un automóvil nuevos, y que semanalmente le entregaba una cantidad de dinero que oscilaba entre quinientos y mil balboas. Habría que determinar la veracidad o falsedad de esa información. Mas de lo que no hay duda es de que Giroldi era compadre de Noriega (éste fue padrino de un hijo de aquél) y también fue Noriega padrino del matrimonio religioso de Giroldi, un año atrás. Incluso Giroldi asistió al bautizo de una nieta de Noriega, poco antes del 3 de octubre de 1989. En otras palabras, siempre hubo amistad, buenas relaciones y consideración recíproca, entre ambos, principalmente de parte de Giroldi para Noriega.

Si ello fue así, ¿qué pudo llevar a Giroldi a encabezar una rebelión contra Noriega, que resultó sangrienta; la cual se inició y terminó en el Cuartel Central el día 3 de octubre último, a costa de la vida de Giroldi y de muchos otros jefes y soldados rebeldes, que fueron ejecutados despiadadamente después de haberse rendido?

## II. Los preparativos de la rebelión

Es importante reiterar que muchas de las situaciones relativas a una Dictadura militar, como ya lo apuntamos en el Prólogo de este libro, y sobre todo si se trata de una rebelión interna contra ella, quedan en el más profundo secreto, por obvias y diversas razones. Al cronista de semejantes hechos sólo le es posible reunir las informaciones veraces que pueda recoger en torno de ellos, analizarlas detenidamente y aventurar alguno que otro supuesto, conjetura o conclusión.

En el mes de abril de 1989, un grupo de tropas escogidas de las Fuerzas de Defensa panameñas, al mando del teniente coronel Aquilino Sieiro, cuñado de Noriega, fue enviado a Namibia (mayor Agustín de Gracia, capitán Juan Arza, capitán León Tejada y otros oficiales, varios de los cuales fueron después ejecutados al fracasar la rebelión de Giroldi), como parte de un contingente de las Naciones Unidas, encargado de observar los arreglos de independencia de aquel país. Uno de los militares panameños expedicionarios, el mayor Felipe Camargo, Sub-jefe del G-2, tuvo conocimiento de que en Panamá se estaba gestando una conspiración para desplazar a Noriega de la Comandancia del ejército, por lo cual Camargo decidió regresar a Panamá, sin permiso de su jefe en Namibia, a fin de alertar a Noriega, cosa que Camargo ha confirmado parcialmente en declaración judicial rendida muchos meses después, en lo relativo al viaje a Namibia y que regresó a Panamá, "sin autorización, por lo que fue dado de baja" (*La Prensa*, febrero 28 de 1990).<sup>1</sup> Para este tiempo ya se había iniciado una corriente de intrigas y celos a propósito de la conspiración, pero fue posible que un grupo central para la misma lograra establecerse, en razón de su vínculo de amistad y de estudios en la Academia Militar de Nicaragua. Allí habían estudiado Gi-

<sup>1</sup> El tabloide *Hadashot*, de Jerusalén, ha informado que guardaespaldas israelíes advirtieron a Noriega varias veces de ese intento de golpe o de asesinato en su contra, que se daría en las Fuerzas de Defensa. El diario no identificó a los israelíes que trabajaban para Noriega, quienes también entrenaban tropas panameñas y agregó que Israel negoció con Noriega un acuerdo de venta de armas en gran escala hace tres meses (*La Estrella de Panamá*, octubre 6).

roldi, Lorenzo, Tejada, Erick Murillo y otros, que después figurarían como jefes rebeldes del 3 de octubre.

Informado Noriega por Camargo, el primero encomendó al coronel Guillermo J. Wong, Jefe del G-2 y al coronel Julio Ow Young, Jefe de Personal, que investigaran sobre la información dada por Camargo. Wong y Ow Young persuadieron a Noriega de que no había tal complot, debido a lo cual Camargo fue destituido y reemplazado en el G-2 por el capitán Nicasio Lorenzo Drake (*The Washington Post*, octubre 11). Wong y Ow Young pudieron haber adoptado una actitud favorable pero cautelosa, con respecto a la rebelión, como ya lo hemos explicado.

El G-2, o Inteligencia Militar, estaba muy al corriente de los asuntos internos de las Fuerzas de Defensa: los movimientos personales de Noriega, la situación de descontento que reinaba en la tropa, los resentimientos de los militares postergados en cuanto a ascensos, la actitud leal de ciertos regimientos y jefes para con Noriega, etcétera. El Jefe del G-2, coronel Guillermo J. Wong y otros altos oficiales pudieron percatarse de las posibilidades de una rebelión interna, y conjeturamos que ellos pudieron inteligenciarse para que la misma fuese fraguada, sin necesidad de que actuaran más que como hilo desencadenador, en un comienzo, y como control reservado de su estructuración. Ellos no tenían mando directo de tropas, pero sí conocían bien a los respectivos jefes de éstas. Nuestras conjeturas no olvidan que Wong y Ow Young, lo mismo que Palacios Góndola, quedaron detenidos desde la tarde del 3 de octubre. También había necesidad de ganarse para la rebelión a la Compañía Urraca (Giroldi), a cargo de la seguridad del Cuartel Central, principalmente del Estado Mayor y de la Comandancia (Noriega).

Se ha dicho que el capitán Jesús George Balma, fue una especie de "cerebro", para los preparativos de la rebelión (aunque seguramente no actuó por iniciativa propia), y que el capitán León Tejada convenció a Giroldi para que dirigiera el levantamiento (sin duda que en caso de éxito, este último sería ascendido), pero tal vez fuera Wong quien iría a la Comandancia.

Conviene recordar que el coronel Julio Ow Young y el teniente coronel Armando Palacios Góndola fueron designados por Noriega, conjuntamente con el coronel Luis A. Córdoba, como representantes del Gobierno en las negociaciones con la Oposición y con la Misión Especial de la OEA, para alcanzar una solución negociada al problema político panameño en el mes de agosto. Todo indica que, como testigos en esas reuniones, Ow Young y Palacios Góndola pudieron haber flexibilizado su posición como militares adictos a Noriega, máxime que en uno de los

informes de la Misión conciliadora se había concluido que “la permanencia del general Noriega en la Comandancia de las Fuerzas de Defensa se identifica por igual, tanto por aliados como por opositores, como uno de los factores, si no el factor, que tiene que definirse para solucionar la crisis en su conjunto” (Informe del 19 de julio).

Después de la intentona contra Noriega que se frustró el 16 de marzo de 1988, tan pronto sus protagonistas trataron de ponerla en marcha, el Narcodictador se vio obligado a decretar nuevos ascensos y traslados. Era otra oportunidad para que Noriega continuara rodeándose de sus más allegados oficiales y suboficiales. Y la llevó a cabo en detrimento de otros oficiales de carrera, postergando a oficiales de mayor antigüedad de servicios y aun designando para algunos ascensos a gente no diplomada en academias militares. Tales distribuciones acomodaticias debían disgustar a muchos miembros del ejército panameño, que eran aspirantes legítimos a mejorar de posición. Por ello, la rebelión recluta sus miembros en el nivel de capitanes, tenientes y subtenientes, de modo principal en cuanto al número de jefes que actuarían.

Reiteramos que a los complotados de marzo de 1988 se les mantenía en prisión, con trato cruel y degradante. Ya en Coiba, ya en la Cárcel Modelo, ya en el Cuartel Central, ya en otras cárceles, se les torturó, se les humilló y se les colocó en condiciones personales muy difíciles e infra-humanas. Todo el resto de las Fuerzas de Defensa no podía ver con buenos ojos esta venganza norieguista.

Por otra parte, la situación de la tropa, en general, acusaba mucho descontento, porque los sueldos eran muy bajos y ya se les pagaba con retraso. Adela Bonilla de Giroldi explicó que su marido actuó “disgustado por la corrupción de altos oficiales y la miseria de los soldados que no pueden alimentar a sus propias familias” (*The New York Times*, octubre 12).

Dos de los oficiales exiliados en Miami, que participaron en el golpe, han trazado el siguiente cuadro de las condiciones en que estaban miles de soldados de las Fuerzas de Defensa panameñas:

a) Dos comidas al día: café y arepa (maíz) a las seis de la mañana y sopa con arroz a las cuatro de la tarde (versión del capitán Romano, un alias de uno de los declarantes); b) Paga de la mitad del salario porque sus cheques bimensuales se cubren con 15 días de tardanza; c) Ellos mismos pagan la reparación de su calzado y uniformes (se les cancelan los días libres si tienen los zapatos rotos); ch) cinco galones de gasolina para los carros patrulleros por día, lo que resultaba muy insuficiente (*The Miami Herald*, octubre 13).

Por lo demás, la CIA anda siempre tras militares que puedan dirigir un golpe o sumarse a él, sobre todo en el caso de Noriega, cuando eran tan evidentes las actitudes y ataques de Reagan contra "el hombre fuerte de Panamá". Es bien sabido que Reagan presentó al Comité de Inteligencia del Senado, en julio de 1988, un plan de operación encubierta para derrocar a Noriega, que ese Comité rechazó. El mismo Noriega, pocas horas después de la rebelión encabezada por Giroldi, acusó a los Estados Unidos de propiciarla y de distribuir dinero para la misma, cosa última que no ha podido ser comprobada.<sup>2</sup> A todo lo anterior, debemos agregar que la Narcodictadura ya era, en octubre de 1989, un hecho escandaloso y reprobado dentro de las mismas Fuerzas de Defensa y que muchos de sus oficiales consideraban llegado el momento de poner fin al reinado trágico y bárbaro del Narcodictador.

Las gestiones conspirativas de los que estructuraban la rebelión, en sus diferentes roles, no se extendieron mucho, cuando buscaban apoyo en diversos regimientos de las Fuerzas de Defensa, tal vez para evitar delaciones. Pero era sabido que varios cuerpos como los Machos de Monte, Tigres de Tinajita, Pumas de Tocumen, el Batallón 2000, de la Joya, serían leales a Noriega, por lo que la conclusión fue la de tratar de impedir que pudieran llegar al Cuartel Central. En cuanto a las tropas élites del Batallón 2000, su jefe, teniente coronel Federico Olechea, prometió a Giroldi su neutralidad y que él no enviaría tropas en favor de Noriega (versión de la viuda de Giroldi).

No ha podido determinarse si alguno de los oficiales comprometidos en la conspiración se puso en contacto con el Comando Sur, pero lo sorprendente fue que el mayor Giroldi, 48 horas antes de la rebelión, el domingo 1o. de octubre en la noche, habló con dos agentes de la CIA en Panamá, en torno al complot, y éstos casi que le exigieron que debía impedirse el asesinato de Noriega, porque de otro modo los Estados Unidos no ayudarían en nada (*The Washington Times*, octubre 6). Giroldi les solicitó protección para su esposa e hijos dentro de una base militar norteamericana, y el bloqueo de algunas vías de acceso al Cuartel Central. Es lo que han informado numerosos funcionarios de la Administración Bush. Sin embargo, cabe la conjetura de que los entendimientos con el Comando Sur pudieron ir mucho más allá, aunque aparentemente no

<sup>2</sup> En sus denuncias de esos días, Noriega acusó a Eric Murillo de tener una cuenta bancaria que pasaba del millón de dólares, pero los familiares del oficial asesinado, su madre y su esposa, han rechazado las imputaciones de Noriega, negando también que los rebeldes recibieron auxilio de la contra nicaragüense o de comerciantes panameños (*El Siglo*, febrero 21 de 1990).



fueron tan específicos como debieron ser, y se dejaron áreas sin acuerdos concretos.

El mayor Giroldi contaba con la Compañía Urraca, dirigida por él y estratégicamente colocada dentro del Cuartel Central, a cuyo cargo estaba la seguridad de éste. También contaba con algunos mandos medios procedentes del Batallón 2000, de Panamá-Policía, de los Doberman, de los Centuriones (fuerzas adscritas a la Comandancia). Con un pie de fuerza que iba de trescientos a cuatrocientos hombres se pondría en marcha la rebelión contra el Narcodictador, aunque el número de las tropas rebeldes fuera reducido, en contraste con el resto de las Fuerzas de Defensa, de mucha mayor cantidad y con mejores armas de combate. El movimiento conspirativo tendría, además, por escenario, el Cuartel Central, pues uno de sus objetivos iniciales era la captura de Noriega y del Estado Mayor.

Parece oportuno mencionar en este aparte sobre "Preparativos", un hecho inesperado y singular que se produce el 20 de septiembre de 1989. El candidato triunfante a la Presidencia, Lic. Endara, decide declararse en huelga de hambre, "al estilo Gandhi", según su expresión propia, y se ubica públicamente en un banco (Edificio Vallarino), tras la vidriera de la planta baja, en el centro de la ciudad de Panamá. Aduce como pretexto el apoyar el llamamiento de desobediencia civil y no pago de impuestos que la nómina de Oposición había formulado sin mayores repercusiones. El candidato, de aproximadamente unas doscientas cincuenta libras de peso, manifiesta limitarse a ingerir líquidos, bajo la atención constante de facultativos médicos. Nadie se explicaba racionalmente la motivación de ese acto, que para muchos iba a ser "suicida", pero lo más que podía pensarse era que se trataba de levantar un poco de vapor político en ese momento de baja atención ciudadana. Por las tardes y noches, grupos de opositoristas nada numerosos se hacían presentes en el lugar, sobre todo porque los días pasaban y muy poco efecto físico se advertía en el huelguista.

Sin embargo, ese "sacrificio", como lo denominó el protagonista, lo dio él mismo por terminado el 9 de octubre, días después de fracasada la rebelión Giroldi. Preguntemos si podía haber o no alguna relación, entre la inesperada huelga de hambre y el golpe militar, y quiénes pudieron haber influido en que ella se efectuara. También es un interrogante hasta qué punto Endara conocía o no algo de la secreta rebelión, o por qué se había iniciado una huelga de hambre que semana y media después coincidiría en el tiempo con la insurrección militar.

### III. Comienza la rebelión

Todos los condicionamientos objetivos y subjetivos que acabamos de exponer, bien pudieron actuar como factores intervinientes en la rebelión de Giroldi, cuyo escenario estaba preparado por los factores aludidos, cual si se tratara de una obra teatral, próxima al desenlace. Lo cierto es que el martes 3 de octubre, a las 7:45 de la mañana, Noriega entró al Cuartel por la parte trasera y la puerta de acceso fue cerrada brusca y rápidamente tras el automóvil de su escolta, hecho que fue la señal para que comenzara la rebelión. Se iniciaron los disparos de ametralladoras que dieron principio a la misma. Hay la versión de que algunos miembros de la escolta de Noriega quedaron heridos. Toda la Compañía Urraca, a más de miembros de Panamá-Policía y de otras brigadas castrenses estaban comprometidos con el golpe y actuaron esa mañana en el Cuartel Central, siendo que a las ocho y media debía celebrarse una reunión del Estado Mayor.

No ha sido posible obtener descripciones más o menos fieles de todo lo ocurrido. Pero Noriega quedó casi que como detenido inmediatamente y fue llevado a sus oficinas del piso superior. También quedaron detenidos, en su mayoría, los miembros del Estado Mayor. Como Noriega no fue esposado, ni bien custodiado (un grave error de los rebeldes), le fue posible hacer algunas llamadas telefónicas a una secretaria, o a una mujer indeterminada, o a ciertos cuarteles (todo ello se ha dicho), dando instrucciones para que alertaran a oficiales o grupos leales a él, a fin de que lo rescataran. Giroldi, Edgardo Sandoval y Jorge Bonilla (tres de los principales jefes de la rebelión, a los que debemos agregar al capitán Javier Liconá Gómez y al capitán Jesús George Balma), dieron orden de ocupar todo el complejo y arrestar al personal civil y militar, lo que produjo una natural confusión y desorden entre los mismos grupos rebeldes. Los primeros tiroteos no llegaron a ser demasiado nutridos, pues a más de la escolta de Noriega, no eran muchas las unidades que dentro del Cuartel Central estuvieron en su favor. A escasos cuarenta y cinco minutos varios helicópteros de los Estados Unidos sobrevolaban el lugar, y un avión Hércules C-130 se mantuvo toda la mañana vigilando el teatro de los acontecimientos, indicio fuerte de que el Comando Sur, destacamento dirigente de las Fuerzas Armadas norteamericanas en Panamá, estaba enterado de que se encontraba en curso una rebelión de tropas contra Noriega.

Las cosas se desarrollaron con demasiados miramientos fatales de los rebeldes para con Noriega, y éste adoptó una actitud muy controlada y

astuta, hasta desafiante, pues no perdió la cabeza. Aparentemente, Giroldi planeó bien la captura de Noriega y del Estado Mayor, aspecto en que la rebelión fue muy exitosa, pero descuidó tener un objetivo claro, categórico, realista, para llevar el golpe a un final favorable al movimiento armado insurreccional. Giroldi y algunos oficiales habían hablado previamente de convencer a Noriega para que aceptara su retiro o jubilación, dándole la oportunidad de quedarse en Panamá. Cuando Giroldi le hizo esta propuesta, Noriega la rechazó e increpó a los jefes rebeldes que hablaban con él, aduciendoles que debían desistir de sus propósitos. Las conversaciones y los actores iban de la oficina de Giroldi a la de Noriega, y de la de éste, a la de aquél. Giroldi continuaba en su afán de persuadir a Noriega para que renunciara o se jubilara, con argumentos relativos a la difícil situación del país y de las mismas Fuerzas de Defensa, que comenzaban a ser odiadas y repudiadas por toda la población panameña, según las expresiones del jefe rebelde.

Es muy explicable que Giroldi se enfrentara a Noriega con una especie de respeto reverencial, ante su máximo superior militar, ante su amigo de años, ante su compadre y padrino, ante su benefactor. Pero tal vez no sea exagerado calificar de ingenuo el organizar una rebelión armada contra un Dictador, contra un Narcodictador como Noriega, para tratar de convencerlo de que aceptara su retiro, con garantías personales en su beneficio. Sobre todo cuando funcionarios norteamericanos, Presidentes de Latinoamérica y otras personalidades en el Hemisferio no habían logrado el retiro de Noriega. A más de que Giroldi sabía que ciertos regimientos mejor armados y en mayor número serían leales a Noriega.

En los parlamentos que se sucedieron, el Narcodictador nunca abandonó sus frases altaneras: "Están cometiendo un gran error". "Ustedes están locos". "Prefiero que me maten, antes de que me entreguen a los norteamericanos". "Respeten mi vida". "La jerarquía se impone sobre la irresponsabilidad". "Mis tropas vienen en camino". "Tienen que matarme a mí primero" (ante la persuasión de que renunciara).

La negativa y la actitud de desafío adoptadas por Noriega comenzaron a introducir algunas diferencias entre los jefes rebeldes, quienes pasaron entonces a debatir si entregaban o no a Noriega a las fuerzas norteamericanas del Comando Sur, cuyas oficinas principales se encontraban tan sólo a quinientos metros del Cuartel Central. Se sabe que el capitán Licon, nervioso por la disputa estéril que presenciaba, decidió obtener un camión y subió a él a los coroneles del Estado Mayor, a fin

de entregarlos junto con Noriega, a las tropas norteamericanas, pero Girolodi le dio una contraorden y los coroneles fueron bajados del camión.<sup>3</sup>

Hubo jefes rebeldes que opinaron en el sentido de que debían entregar a Noriega al ejército norteamericano, pero el Narcodictador los apostrofaba para que lo mataran y no lo entregaran a quienes él consideraba sus más fieros enemigos, que le tenían preparados dos juicios en Florida. Girolodi se oponía también a esa entrega (*The Washington Post*, octubre 11). Desde el primer momento, hasta los incidentes aquí relatados, ya habían transcurrido unas dos horas. El parlamento y los esfuerzos persuasivos de Girolodi parecían deberse a la confianza que tenía en que el jefe del Batallón 2000 (las mejores y más aguerridas tropas de las Fuerzas de Defensa), el teniente coronel Federico Olechea, le había prometido una adhesión indirecta, consistente en no actuar contra los rebeldes (versión dada por la viuda de Girolodi en Miami), lo que evidencia hasta dónde se había extendido la conspiración, que estaba apoyada por la Compañía Urraca, el Escuadrón de Caballería de Panamá Viejo, oficiales del Batallón 2000 y de Panamá-Policía, así como por algunos oficiales de otras unidades.

Naturalmente que la acción inmediata había sido confiada a un grupo relativamente pequeño; es decir, a la Compañía Urraca, cuyo jefe era Girolodi. Pero también estaban enterados de la rebelión el jefe del G-2 (Inteligencia Militar), coronel Guillermo J. Wong y el teniente coronel Julio Ow Young, lo mismo que el teniente coronel Armando Palacios Góndola. Conociendo la adhesión a Noriega de los regimientos a que antes nos hemos referido, se había descartado el gestionar su apoyo a la rebelión, porque ello equivalía a denunciarse.

De las diez de la mañana en adelante ocurrieron dos hechos de importancia. Girolodi le ordenó al Oficial de Información de la Dirección de Relaciones Públicas, de las Fuerzas de Defensa, periodista Daniel Alonso, que se dirigiera con otros rebeldes a la Radio Nacional, ubicada en el edificio de la Contraloría de la República, bastante lejos del Cuartel Central y que leyera la *Proclama* que se había redactado con motivo de la rebelión. El segundo hecho fue el envío, por parte de Girolodi, del capitán Javier Liconá Gómez, jefe del Departamento de Caballería en el Cuartel de Panamá Viejo, quien estaba en el Cuartel Central, y otro oficial no identificado, para que hablaran con el general Marc Cisneros, en la base militar norteamericana de Fort Clayton, con el objeto de insistir en la intervención de las tropas norteamericanas en la rebelión. Veamos

<sup>3</sup> Kempe Frederick: *Divorcing the Dictator*, G. P. Putnam's Son, New York, 1989, pág. 386.

cómo se desarrollaron estas gestiones y por qué se hizo tal contacto con el general Cisneros.

#### IV. La proclama de los rebeldes

Minutos después de las diez de la mañana, el grupo rebelde despachado ocupó la Radio Nacional, en el edificio de la Contraloría General de la República, y el Oficial Daniel Olonso leyó la *Proclama* que los rebeldes tenían preparada.<sup>4</sup> En ella afirmaban que la rebelión era un movimiento exclusivamente castrense, sin intervención de políticos; que su finalidad era la de pasar a retiro a Noriega, al Estado Mayor y a todos los demás oficiales que habían cumplido el tiempo de retiro (25 años de servicio); que exhortaban a los demás regimientos de las Fuerzas de Defensa a unirse a los rebeldes; que proponían la celebración de elecciones tan pronto fuera posible y que apoyaban al Gobierno Provisional del Ing. y Presidente Francisco Rodríguez. Agregaba que era necesario democratizar al país y evitar que el comunismo entrara a Panamá. Firmaban la *Proclama* el mayor Giroldi y los capitanes Javier Liconá, Jesús George Balma y Edgardo Sandoval.

Esta *Proclama* fue grabada por Radio Exitosa, que la estuvo repitiendo a cada instante hasta las once y treinta de la mañana, cuando la emisora salió de circulación, silencio que fue un síntoma muy desfavorable para los rebeldes, en todos los que escuchaban tan peculiar arenga. Ha explicado el periodista Daniel Alonso, Oficial de Información que leyó la *Proclama*, que después de leída regresó al Cuartel Central, y advirtiendo síntomas de debilitamiento en Giroldi, como a las once de la mañana, previa autorización del teniente Jorge Bonilla, se dirigió a Canal 4, para hacer de conocimiento nacional la *Proclama*. “Lastimosamente, cuando tenía sólo unos dos minutos de estar al aire, TV 4 se vuela, se sabotea la corriente eléctrica y a los pocos minutos llegaron las unidades de las Fuerzas Elite de la Unidad de Comando y me arrestaron junto con los demás compañeros que estaban conmigo” (*La Prensa*, 13 de enero de 1990). En efecto, el silenciamiento de Radio Exitosa y la suspensión del Canal 4, fueron indicios claros de que algunas fuerzas leales a Noriega ya habían comenzado a actuar.

<sup>4</sup> No se ha podido obtener el texto íntegro de la *Proclama*, pero algunos periódicos han citado partes de ella y el autor de esta obra la escuchó esa mañana. Los periódicos norieguistas han afirmado que la *Proclama* fue pasada a máquina por Margarita Achurra, quien a través de Giroldi tuvo nexos con la rebelión (*La Estrella de Panamá*, noviembre 4).

El texto de la *Proclama* acusa todas las debilidades y limitaciones de la revuelta. El pueblo panameño, de tanta beligerancia contra el Narcodictador y su régimen, iba a recibir muy fríamente la noticia de un movimiento “exclusivamente castrense”. Su finalidad del retiro de la cúpula militar de las Fuerzas de Defensa implicaba un objetivo muy estrecho. Y el apoyo al Gobierno Provisional del Presidente Rodríguez anunciaba el continuismo de todo el sistema gobernante, lo que podía propiciar la indiferencia del pueblo. Este no desarrolló iniciativa alguna, ni en contra ni en favor de la rebelión y nadie lo incitó a nada, durante ésta, por lo cual se mantuvo muy pasivo, máxime que ningún líder político o dirigente improvisado llamó a movilización de ninguna clase. Se ha dicho que los rebeldes tenían, en verdad, otros fines ulteriores, y entre ellos, el instalar a Endara como Presidente, pero no hemos podido confirmar esta insólita versión. En algunas oficinas públicas ciertos empleados, al escuchar la *Proclama*, se regocijaron abiertamente de lo que parecía ya como la caída del Narcodictador.

## V. Licona habla con Cisneros

El envío del capitán Licona y otro oficial rebelde a Fort Clayton, para que hablaran con el general Cisneros, hacía presumir vínculos previos entre el Comando Sur y la rebelión Giroldi.

En efecto, las versiones más veraces indican que el domingo 1o. de octubre la esposa de Giroldi se puso en contacto con la esposa de un agente de seguridad militar, con quien mantenía relaciones amistosas y le previno de que Giroldi quería discutir su plan con oficiales norteamericanos. Ese mismo día domingo en la noche, el mayor Giroldi se reunió con dos funcionarios de la CIA, que recibieron con frialdad la idea del golpe y quienes le advirtieron que era indispensable evitar la muerte de Noriega, pues de otro modo los Estados Unidos se desligarían totalmente de todo lo relacionado con la rebelión. De acuerdo con fuentes norteamericanas, Giroldi se limitó a solicitar asilo para su familia y el bloqueo de dos carreteras, para evitar que los leales a Noriega tuvieran acceso al Cuartel Central (*The Miami Herald*, octubre 7). Además, Giroldi expresó que la rebelión se iniciaría el día siguiente, lunes 2 de octubre, pero en esta última fecha su esposa, Adela Bonilla de Giroldi, comunicó telefónicamente en la noche que había ocurrido un aplazamiento para que la rebelión se llevara a cabo el martes 3. Parece extraño que el domingo 1o. en la noche, Giroldi no hubiera solicitado que se impidiera el trans-

porte y acceso de tropas leales desde Río Hato, desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen y desde el Aeropuerto de Paitilla, a quince minutos en automóvil del Cuartel Central.

Sin embargo, oficiales rebeldes exiliados en Miami han explicado que Giroldi les indicó haber pedido a los agentes de la CIA que las tropas norteamericanas dieran cobertura en el Aeropuerto de Tocumen, para evitar la llegada de leales a Noriega desde la base aérea de Río Hato, petición que Adela de Giroldi confirmó posteriormente. El Departamento de Defensa norteamericano negó que los rebeldes hubieran presentado tal solicitud (*The Washington Post*, octubre 11).

Estando aún en el Cuartel General, Licona entraba y salía de la oficina en donde se encontraba Noriega con Giroldi y los demás oficiales, y advirtiendo que Giroldi comenzaba a ceder ante la penetración psicológica de Noriega, según explica el Oficial de Información Daniel Alonso, Licona le dijo a Giroldi: “No converses con él que te va a convencer de que te echés para atrás. No lo escuches”. Agrega Alonso que Noriega estaba convenciendo a Giroldi: “ví cómo lo fue mirando, mirando, mirando, lo fue como bajando y lo sentó, lo hizo sentarse. La tropa seguía firme en la decisión que se había tomado, pero la cabeza estaba flaqueando, daba muchas concesiones” (*La Prensa*, 13 de enero de 1990). Como dijo Adela Bonilla de Giroldi, “mi esposo debió tener un momento de debilidad” (*The Miami Herald*, octubre 13). Noriega se dedicó a hacer uso de su estrategia más constante: ganar tiempo, y en este caso, para que llegaran las fuerzas leales a salvarlo.

Según las fuentes norteamericanas que estamos citando, el capitán Licona y su acompañante llegaron a Fort Clayton a las 11:18 a.m. del 3 de octubre y Cisneros les notificó que las tropas norteamericanas estaban preparadas para tomar en custodia a Noriega si lo traían a Fort Clayton, pero Licona respondió en dos ocasiones que los rebeldes no entregarían a Noriega. Luego Licona le habló a Cisneros preguntándole por la ayuda norteamericana en helicópteros y bloqueo, y Cisneros le respondió disgustado que la opinión mundial censuraría a los Estados Unidos por intervención y que los panameños protestarían del bloqueo de carreteras, terminando por afirmar: “No tengo autorización para hacer nada” (*The New York Times*, octubre 11). Mas diez minutos después, Cisneros dijo que acababa de recibir del Pentágono autorización para el bloqueo de carreteras.

Lo cierto es que el día anterior al golpe, desde tempranas horas de la mañana, tropas de los Estados Unidos fueron colocadas en Fuerte Amador, para hacer ejercicios. Esa tarde del día 2 el Comando Sur

notificó a las Fuerzas de Defensa que el día 3 de octubre en la mañana llevarían a cabo nuevos ejercicios en Fuerte Amador. Pero desde la madrugada del 3 de octubre las tropas norteamericanas habían bloqueado las instalaciones de la UESAT (Unidad Especializada Antiterror), de la Marina Panameña, la Quinta Compañía Victoriano Lorenzo, la Policía de Balboa y otras instalaciones panameñas cercanas al Canal (*Crítica*, octubre 4).

El mismo Noriega, en sus palabras de Santiago de Veraguas, explicó que “desde las cuatro de la mañana (los norteamericanos) tenían cerrado el paso de Loma Cová en Arraiján, las instalaciones de la Brigada Victoriano Lorenzo y la Unidad Especial Antiterrorista (UESAT) en Fuerte Amador” (*La Estrella de Panamá*, octubre 6).

Pero ese control norteamericano de Fuerte Amador y de la carretera en Howard Field y Arraiján fue presentado, en un comienzo, por Pete Williams, vocero del Pentágono, como simple coincidencia de ejercicios militares “planeados previamente”, pues “nunca bloqueamos ninguna carretera. Sellamos Fuerte Amador y Howard para proteger nuestro personal y propiedades” (*La Estrella de Panamá*, octubre 6).

Luego de su conversación con Cisneros, Licona llamó dos veces, por teléfono, a Giroldi, desde Fort Clayton. La primera vez, Giroldi le informó que el golpe estaba perdiendo fuerza y que la posibilidad de éxito había disminuido en un 50-50. En la segunda llamada contestó un oficial leal a Noriega, diciéndole a Licona que Giroldi no podía contestar más al teléfono y que regresara al Cuartel Central, lo que desde luego Licona no hizo.

El envío de Licona a Fort Clayton significaba que Giroldi reclamaba una ayuda tal vez prometida (ello no se sabe, en realidad, y los funcionarios norteamericanos lo han negado, sin que pueda conocerse bien cuál fue todo el contenido de la conversación entre Giroldi y los agentes de la CIA, el domingo en la noche); pero significaba también que no había comunicación telefónica entre Giroldi y Cisneros, lo cual, en el desarrollo práctico de la rebelión, implicaba una falla importante.

Las informaciones publicadas por los periódicos norteamericanos durante el mes de octubre permiten hacer la *conjetura* de que se produjo un desacuerdo entre Giroldi y Cisneros, a propósito de la entrega de Noriega, a media mañana de la rebelión, y ello trajo por consecuencia que las tropas norteamericanas hicieran muy poco por ayudar a los rebeldes. Incluso se sabe que pasado el mediodía, en las primeras horas de la tarde, el Presidente Bush autorizó la captura de Noriega y que el General Colin Powell, Jefe de Estado Mayor Conjunto, comunicó al General



Maxwell Thurman, Jefe del Comando Sur en Panamá, esa autorización, pero ya el golpe había fracasado (*The Miami Herald*, octubre 10; *La Estrella de Panamá*, octubre 9).

## VI. Reacción de civiles y militares norieguistas

De las doce del día en adelante, la televisión oficial (o del Estado Mayor, aunque con fachada de empresa particular), Canal 2, comenzó a dar información respecto a la revuelta que se desarrollaba. La conocida voz del locutor Eric Rodríguez Auerbach suministraba parcos informes y coordinaba sobre la marcha los llamados de civiles y militares en apoyo de Noriega. No se sabía en dónde se encontraba éste, y nadie mencionaba casi al Narcodictador, salvo para expresar que “el general está en su puesto” y dirigía las operaciones bélicas. Rodríguez Auerbach y otros sí sabían que los rebeldes lo habían capturado, pero evitaban decirlo públicamente, pues la verdad sobre la captura de Noriega podría pesar mucho en el ánimo de sus “leales”.

Ya sabemos que a las once y media de la mañana los destacamentos de soldados norieguistas habían acallado los boletines de la *Proclama*, repetidos incesantemente por Radio Exitosa, y que también se había impedido el intento de leerla por Canal 4, misión que trató de cumplir el Oficial de Información Daniel Alonso. Era que ya estaban muy cerca de iniciar el contra-ataque al Cuartel Central los Machos de Monte, traídos en avión desde Río Hato; los Pumas, de Tocumen; los Tigres de Tinajitas; el Batallón 2000, de Fuerte Cimarrón (La Joya); los contingentes de Fuerzas Especiales y otros cuerpos menos numerosos. Todos fueron transportados en camiones, hasta las cercanías del Cuartel Central, desde los lados del Aeropuerto de Paitilla, la calzada marina del Boulevard Balboa, la Avenida Central y la Avenida A. En estos instantes, ya la televisora Canal 2 pedía calma y oficiales norieguistas pronunciaron arengas contra los rebeldes, tal como lo hicieron el capitán Cortizo, el mayor Rodríguez, el teniente coronel Arnulfo Castrejón, muy exaltado. Hasta el capitán Jesús George Balma, de quien se dijo en un principio había firmado la *Proclama*, desmintió este hecho y manifestó lealtad a Noriega. El mayor Edgardo López Grimaldo, Director de Información de las Fuerzas de Defensa, lanzó un llamado al pueblo para que no apoyara el alzamiento.

Entre los civiles, hablaron por la televisión el Jefe de los Batallones de la Dignidad, Benjamín Colamarco, y Totí Suárez, a más de que

Canal 2 transmitía mensajes de los grupos CODEPADI (empleados públicos), gobernadores, alcaldes y representantes de corregimientos. Después, pero antes del final de la rebelión, el Vicepresidente Carlos Ozores hizo un llamado a la calma, anunciando que el único problema estaba aún en el Cuartel Central, ya cercado.

El número superior de las tropas leales a Noriega y su poderoso armamento, además de la decisión con que atacaron, presagiaba el final de la rebelión. Muchos soldados subieron a los techos de las casas vecinas al Cuartel, y desde allí dirigieron sus disparos hacia los interiores y patios de éste. Ametralladoras, morteros, granadas, hicieron su labor por todos lados. Dentro del Cuartel, Noriega seguía su estrategia de intimidación contra Giroldi y otros oficiales rebeldes: "Ahí fuera están muriendo tus soldados (le decía a Giroldi) y tú qué haces; esa es la clase de Comandante que quieres ser". Los atacantes lograron concertar "una gran potencia de fuego", como expresó más tarde un comunicado oficial (Boletín de las Fuerzas de Defensa, *Crítica*, octubre 4).

Con la actitud un tanto derrotista de Giroldi, luego de varias horas de discusión con Noriega, así como con los otros jefes rebeldes, y dándose cuenta también de que las tropas norteamericanas no habían bloqueado todas las rutas, el enorme fuego concentrado contra el Cuartel Central obligó a Giroldi y a los demás oficiales rebeldes a capitular. Entregaron sus armas ante el mismo Noriega, a la una de la tarde.

Sin embargo, la tropa rebelde continuaba disparando contra los atacantes del Cuartel, y Noriega los conminó del modo siguiente: "Habla el Comandante, vengan hacia el Cuartel Central y eviten mayores derramamientos de sangre, ya que el mayor Giroldi se entregó y ha depuesto las armas. Yo soy garante de Ustedes" (*El Panamá-América*, enero 25 de 1990; *La Estrella de Panamá*, enero 26 de 1990), palabras que fueron grabadas, y obtenida la grabación después del derrocamiento de Noriega.

Pero inmediatamente antes de la capitulación de los jefes, grupos de soldados de los contingentes de Giroldi trataron de ponerse a salvo. Unos subieron por las murallas que rodeaban al Cuartel, dejando atrás sus armas; se despojaban de los uniformes y pedían a los vecinos del Chorri- llo que les suministraran ropas comunes para escapar y ocultarse. Un sargento, de los exiliados en Miami, dijo que "escapé sin camisa en la confusión del contra-ataque y pude llegar a una base militar norteamericana" (*The New York Times*, octubre 13). En la tarde y en la noche, muchos soldados y oficiales detenidos fueron sacados del Cuartel Central y llevados a otros cuarteles de la ciudad de Panamá y sus cercanías. La escena de filas de rebeldes con las manos en alto detrás de sus cabezas,

en el patio del Cuartel Central, poco antes del anochecer, fue captada por la televisión norteamericana y proyectada en la noche por el Canal 8, del Comando Sur.

Conviene anotar que todo el pueblo de la ciudad de Panamá se mantuvo al margen de los acontecimientos, siguiéndolos con esperanza íntima pero con frialdad, al mismo tiempo. Se sabe que al mediodía se reunieron los directores de los partidos de oposición y los integrantes de la nómina presidencial opositora, a fin de considerar la situación creada por la rebelión, y decidieron no hacer otra cosa que publicar al día siguiente una declaración en que lamentaban lo ocurrido y culpaban a Noriega del derramamiento de sangre (*La Estrella de Panamá*, octubre 5).

A pesar de que la parte de los insurrectos entregó sus armas al mediodía, en la tarde y en la noche del 3 de octubre se escuchaban esporádicas ráfagas de disparos dentro del Cuartel Central. Algunos de los rebeldes, acaecida la rendición, pudieron llamar telefónicamente a sus familiares. Tal fue el caso del capitán Erick Murillo, quien habló con su madre y le dijo: "Mami, estoy bien. Reza para que todo salga bien" (*El Siglo*, febrero 21 de 1990). Sin embargo, Murillo estuvo entre los fusilados el 4 de octubre.

En las últimas horas de la tarde, el Narcodictador formuló breves declaraciones a la televisora Canal 2. "El incidente de esta mañana —dijo— corresponde a la agresión y penetración permanentes de las fuerzas de los Estados Unidos contra la tranquilidad de nuestro país" (*The New York Times*, octubre 4). "Desde hace semanas habíamos recibido esta información, de que ahora iban a bajar el nivel de la penetración, tratando de confundir los mandos medios" (*Crítica*, octubre 4).

Y al día siguiente, 4 de octubre, en horas de la mañana el Narcodictador concurrió a La Joya, sede del Batallón 2000, como a cincuenta kilómetros de la ciudad de Panamá, para hacerles un reconocimiento a esos soldados, dirigidos por el teniente coronel Federico Olechea, ya que su participación en el contra-ataque leal fue muy decisiva. Allí, el Narcodictador expresó que "los traidores recibirán la debida sanción. En las Fuerzas de Defensa no queremos Oficiales como esos traidores, débiles y pobres de mente, sino oficiales competentes y leales que se conducen con decoro y jamás abandonaban a su tropa". El coronel Teodoro Alexander, los mayores Rafael Cedeño y Daniel Delgado y otros oficiales estuvieron presentes durante esta visita (*Crítica*, octubre 5), en la que Noriega, unas cuantas horas después de la rendición, ya estaba enterado de que se encontraba en curso "la debida sanción para los traidores".

No obstante, con respecto al Batallón 2000 hubo el detalle de cierto retraso (posiblemente indecisión), en el teniente coronel Olechea, para ordenar finalmente que se trasladara a la ciudad, con el fin de atacar el Cuartel Central. Pocos días después de la rebelión, la señora Adela Bonilla de Giroldi, en su exilio de Miami, formuló declaraciones a la prensa, aseverando que “el golpe pudo haber triunfado si no hubiera sido por el mayor Federico Olechea, comandante del Batallón 2000. El poder de fuego de esa unidad habría asegurado la victoria, pero en vez de ello, ese Batallón fue aerotransportado y tomó la iniciativa en aplastar el golpe. En el último momento cambió de lado, a pesar de que mi esposo y Olechea eran buenos amigos y habían hablado varias veces del golpe el mes anterior. Todo estaba listo, pero Olechea jugaba al ganador y falló en adherirse por su cobardía. Él cometió traición” (*The New York Times*, octubre 12). El comandante Thunder, alias de uno de los oficiales rebeldes, que en ese momento acompañaba a la viuda de Giroldi, expresó: “Había dos intentos de golpe. Olechea y otros querían desarrollar su propio golpe, una vez que Noriega estuviera fuera de la película” (*The Miami Herald*, octubre 13).

Radio Impacto, de San José, Costa Rica, hizo el comentario, en la noche del ocho de noviembre, de que Olechea había caído en desgracia y enviado a Guatemala, como Agregado Militar, pero se ignora a ciencia cierta si esa medida fue adoptada o no, o si fue jubilado. Para fines de diciembre, Olechea estaba en Panamá.

## VII. Parte de guerra y asesinatos

Durante la noche del 3 de octubre y durante todo el día siguiente, un ominoso silencio envolvía al Gobierno y a las Fuerzas de Defensa. Nada se sabía sobre los cientos de rebeldes detenidos, después de la rendición. En las últimas horas de la tarde del día 4 de octubre, algo más de veinticuatro horas después de terminada la revuelta, un tenebroso y extraño “Parte de Guerra”, suscrito por el teniente coronel Carlos Arosemena King, fue leído en la televisora oficial.

Notificaba que se habían dado *10 muertos en combate, todos rebeldes*: un mayor (el jefe rebelde Giroldi); cuatro capitanes (Tejada, Arza, Sandoval y Murillo), un teniente (Bonilla), dos sub-tenientes (Concepción y Ortega) y dos sargentos (Julio y Muñoz). No se anotaba ningún muerto en las fuerzas leales. Entre heridos, 18 en los regimientos leales, 3 rebeldes y 5 civiles. Como detenidos, 37 rebeldes, y entre ellos, los

coroneles Guillermo J. Wong y Julio Ow Young y el teniente coronel Armando Palacios Góndola (los tres por sospechas o actuación inadecuada); 2 mayores; 3 capitanes, y entre ellos Jesús George Balma y Nicasio Lorenzo; 6 tenientes; 13 sub-tenientes; 3 cabos y 7 agentes. Pero esa cantidad de detenidos resultaba notoriamente reducida, y la de muertos debía ser superior.

Desde el 3 en la noche y el día 4 de octubre, circularon insistentes rumores, en el sentido de que los muertos no lo habían sido "en combate", sino por ejecución o asesinato. Pero el Director de Información, mayor Edgardo López Grimaldo, desmintió esos rumores. En su oportunidad, la viuda de Giroldi declaró a la prensa en Miami, que el mismo Noriega había ultimado a su esposo cuando la rendición (*The New York Times*, octubre 12). Y el capitán Nicasio Lorenzo, que estaba en la lista de detenidos, fue entregado muerto a sus familiares, con la explicación de que se había ahorcado en su celda, y el certificado de defunción indicaba que había muerto de "asfixia" el viernes 6 de octubre. Su esposa, Luz Elaine de Lorenzo, al reclamar el cadáver que se le negaba, expresó: "Quiero que todo el mundo sepa que él no se suicidó. Él era un católico devoto", y refiriéndose a Noriega, increpó a los oficiales y soldados que hablaron con ella del modo siguiente: "Cómo pueden obedecer a ese monstruo" (*The Washington Post*, octubre 11).

No podemos olvidar que el Narcodictador, al dirigirse por megáfono a los rebeldes, les solicitó que se rindieran y les prometió ser garante de sus vidas.

Carlos Andrés Pérez, enérgico y batallador Presidente de Venezuela, acusó al Gobierno panameño de ejecutar oficiales rebeldes prisioneros (*The Washington Post*, octubre 11).

Pasada la invasión norteamericana del 20 de diciembre, el nuevo Procurador General de la Nación, Lic. Rogelio Cruz, ha iniciado una investigación sobre los asesinatos ocurridos cuando la rebelión del 3 de octubre, y ha declarado que Giroldi fue llevado esa tarde al Cuartel de Tinajita, cercano a la ciudad de Panamá; interrogado y torturado en la noche del 3 y en la madrugada del 4 de octubre, los capitanes Ramón Díaz y Heráclitos Sucre le dispararon por la espalda sus metralletas "Uzis" y "Galil" (*El Panamá América*, 13 de enero de 1990). Antes de que lo hicieran, un Giroldi, herido por las torturas y sereno ante la muerte, les dijo: "Ustedes me van a matar".

Ese respeto reverencial de Giroldi para Noriega; esa falta de claridad de Giroldi en cuanto al objetivo dilemático de la rebelión; esa creencia errónea de Giroldi de que podía convencer a Noriega para que se jubi-

lara; esa debilidad de Giroldi frente a un Noriega altanero y desafiante, no sólo determinaron el fracaso de la rebelión, sino que hicieron de pasaporte para la otra vida, ordenado por un vengativo Noriega contra Giroldi y decenas de rebeldes asqueados de manera irremediable por la monstruosidad del Narcodictador. Se dijo que 22 personas fueron ejecutadas el 4 y 5 de octubre.

También se ha conocido, en la investigación todavía incompleta de los sucesos del 3 de octubre, que el mayor Asunción Eliecer Gaytán, jefe de escolta de Noriega, ejecutó a cinco de los rebeldes en un hangar del sector canalero de Albrook Field (*El Panamá-América*, enero 28 de 1990). Gaytán se refugió en la Nunciatura Apostólica de Panamá, como asilado, inmediatamente después que lo hizo el Narcodictador.

Ha habido varias versiones sobre el número real de asesinados, pero furtivos datos que han circulado, a más de los oficiales, indican que no fueron menos de quince rebeldes, baño de sangre que duró algunos días (*El Panamá-América*, enero 23 de 1990). La Compañía Urraca fue disuelta; el personal del G-2 fue totalmente reemplazado.

## VIII. Palo, plomo y plata

Semanas antes de la rebelión Giroldi, las “mujeres nacionalistas” de la Provincia de Veraguas venían organizando un “homenaje” para el general Noriega. Era uno de esos “homenajes” que el Narcodictador acostumbraba ordenar, de tiempo en tiempo, para satisfacción de su atrabiliario ego y para tratar de recomponer su maltrecho prestigio oficial. El acto debía celebrarse el 5 de octubre, en el Gimnasio de la Escuela Normal, en Santiago.

Es verdad que el día 4 de octubre, en la tarde, los “amigos” de Noriega le habían llevado una manifestación de apoyo (empleados públicos, taxistas, etcétera). Pero el Narcodictador se había limitado a saludar con sus puños a los manifestantes, desde un alero del Cuartel Central.

El “homenaje” de la Normal le venía a Noriega muy a propósito de mayores efusiones, discursos, etcétera. En efecto, sirvió para que el Narcodictador desahogara todo lo que pudo pensar y proyectar de inmediato, en razón de la revuelta del 3.

No podía menos que mostrarse vengativo, eufórico, desenfrenado. Lo particular psicológico de sus palabras fue que, casi al final de las mismas, al referirse a “los que estuvieron pensando en nosotros y estuvieron

rogando por que no se derramase sangre inocente”, tomó la figura de un pequeño Cristo, que se había hecho allegar desde un comienzo, y levantándola hacia el auditorio, dijo: “como la sangre de Cristo que me protegió anteayer”. Un rasgo típico de santería, de quien por muchos años se dedicó a ella, a la brujería y al esoterismo, muy en privado y casi a solas. Hay otros particulares de ese “homenaje” que seguiremos destacando.

Ante el fracaso de la revuelta, que él atribuyó a la Oposición panameña y al Comando Sur, Noriega utilizó varias veces la expresión vulgar “se jodieron”. Con respecto a Endara, por ejemplo, dijo que “el payaso de la huelga de hambre salió a comer para estar llenito e irse para la presidencia, pero se “jodió”.

Amenazó a todos los empleados públicos calificándolos de “traidores”: “Tenemos que comprometernos a que las leyes populares tienen que venir y los funcionarios y los Ministros que no quieren, que se vayan. Quieren jugar a la democracia cuando nos tienen avasallados, amenazados y sometidos. No podemos jugar a la democracia con esos elementos de juicio, hay que botarlos; ¡hay que botarlos!” Aquí amenazaba a los Ministros y tal vez oblicuamente hasta al Presidente Provisional Francisco Rodríguez, hombre poco dado a la venganza.

Continuó el tema así: “El funcionario público militante, activo y con dignidad se está jugando su pellejo, entonces, en nombre de ese funcionario militante, activo y que se juega su pellejo, hay que botar a los que no lo hacen. Y hay que botarlos para que dejen las plazas vacantes para los hombres dignos que no tienen empleo. Para los del Batallón de la Dignidad que no están nombrados”. En estas palabras hay una fuerte insinuación de que los Batallones de la Dignidad podrían reemplazar, hacia el futuro próximo, a regimientos enteros de las Fuerzas de Defensa, puesto que de ellas habían surgido las dos conspiraciones que habían puesto a temblar al Narcodictador: la de Macías (1988) y la de Giroldi.

Aprovechó la oportunidad para convertir toda la Administración Pública al sistema, bien conocido por el Narcodictador como G-2 que fue por doce años, de la soplonería: “Aquí cada empleado público digno y militante tiene que constituirse en un fiscal del traidor que está incrustado y vamos a hacer la lista, y vamos a hacer la lista. Vamos a hacer la lista porque hay mucha gente que necesita empleo y está fuera del gobierno. La lista, la lista, la lista, nombres, nombres”. Es el paroxismo del delator, que quiere que todo el mundo vaya a delatarle a él los más mínimos detalles que pueden serle desfavorables.

Delineó un régimen legal de excepción: “Tenemos que hacer un paquete de leyes de guerra, de emergencia, que contemple la seguridad económica, la seguridad laboral, la seguridad física de nuestra frontera. Entonces eso también resume el principio de lo que hay que hacer ante la agresión sufrida hace dos días, nos está demostrando que la agresividad, nos está demostrando que la Guerra es algo a lo cual hay que hacerle frente con Partes de Guerra y no con Partes de Democracia”. Ya sabemos lo que quieren significar los militares cuando hablan de la doctrina de la seguridad estatal, a más de que en el caso del Narcodictador, éste acababa de ordenar la redacción del Parte de Guerra sobre la rebelión, que no era más que una lista de asesinados, detenidos y heridos.

Se refirió también, como en el discurso del 12 de agosto de 1989, al ex-Presidente José Antonio Remón Cantera, “a quien ellos asesinaron”, y a Torrijos “a quien ellos asesinaron también y ellos lo asesinaron, señores, mediante los métodos sofisticados de la tecnología aérea. Ellos le tumbaron el avión”, inculcando directamente a los Estados Unidos, por primera vez, en ocho años, por la muerte de Torrijos.

Terminemos el enjuiciamiento de estas frenéticas y bárbaras prevenciones: “Aquí hay que aplicar un viejo principio español de un autor anónimo que dice, que es el de las tres “p”: “Al indeciso, palo; al enemigo, plomo y al amigo, plata”. El Narcodictador de dobleces, de reservas mentales útiles, de evasivas, de engaños y falsedades, se ha quitado, al fin, la careta. Ha revelado lo que él mismo califica de “principio”; un principio que ha dominado toda su vida, desde la adolescencia, y cuya práctica vino agravándose con el correr de los años. No se trata de una filosofía, porque es demasiado atribuirle la posesión de filosofía alguna. Es ya un modo de conducta inveterada; para con las indecisiones de sus semejantes, palo. Muerte para el enemigo. Y soborno, plata, para el que, como amigo, lo considera la cumbre de la humanidad. Estas palabras y planes, alimentados por el riesgo de muerte que corrió en la rebelión de dos días atrás, constituyen la explosión verbal furibunda del Narcodictador psicópata.

Y no eran simples amenazas, porque pocas semanas después se dictaron las “leyes de guerra”, con numerosas causales de destitución para los empleados públicos, congelamiento de salarios para los mismos, eliminación de ventajas fiscales para los inversionistas, etcétera.



## IX. Controversias en Washington: la participación norteamericana

El primer funcionario norteamericano que el mismo 3 de octubre, en la media mañana, se refirió al golpe militar, fue el Sr. Marlin Fitzwater, vocero de la Casa Blanca, quien formuló declaraciones para la prensa, explicando que la Administración Bush había oído algunos rumores en esos días, de que un golpe militar podía estar en perspectiva en Panamá. Añadió Fitzwater que los Estados Unidos no ayudaron el intento, no habían sido informados directamente de él por los participantes con anticipación y no se les había solicitado ayuda por nadie, terminando enfáticamente con la siguiente expresión: "El Presidente no sabe sobre ello, el Secretario de Estado no sabe sobre ello y el Secretario de Defensa no sabe sobre ello" (*The Washington Post*, octubre 4, y en el mismo sentido *The New York Times*, octubre 4).

Algunas horas más tarde, el mismo Presidente Bush también formuló declaraciones en el sentido de que "hubo rumores de que (el intento de golpe) fue una operación norteamericana, y puedo decir que no es verdad" (*The Washington Post*, octubre 4). Cabe recordar que, a raíz de la anulación de las elecciones en Panamá, el 10 de mayo de 1989, disposición adoptada por la Narcodictadura norieguista, el Presidente Bush dirigió una exhortación pública a las Fuerzas de Defensa de Panamá, urgiéndolas para que derrocaran a Noriega y manifestando expresamente que "me encantaría verlo que lo sacaran" (*The Washington Post*, octubre 4). En los meses siguientes, el Presidente Bush se pronunció varias veces en el mismo sentido, y ahora su vocero Fitzwater y el mismo Bush negaban toda participación norteamericana en la frustrada rebelión de octubre.

Sin embargo, en la misma tarde del 3 de octubre, varios Senadores y Representantes, desde la Colina del Capitolio, en Washington, comenzaron a censurar acremente la actitud de la Administración Bush con relación al fracasado golpe, pues algunos funcionarios del Departamento de Estado suministraron informaciones confidenciales a miembros del Congreso sobre lo que estaba sucediendo en Panamá.

El Senador David L. Boren, Presidente del Comité de Inteligencia del Senado, consideró, el 3 de octubre, que las tropas norteamericanas debieron auxiliar la rebelión. "Aquí tienen Uds. un pueblo valiente en Panamá... tratando de quitarse de encima ellos mismos a un distribuidor de drogas y asesino, quien se ha apoderado del país, dijo Boren... y tener a los Estados Unidos, con todo nuestro poderío y fuerza, toda

nuestra creencia en la democracia, permanecer al tanto (quinientos metros de distancia) y no hacer nada y permitir que este golpe fracasase; creo personalmente que es un error" (*The Washington Post*, octubre 4).

Igual dura crítica formuló, al conocerse el fracaso del golpe, el Senador John McCain, miembro del Comité de Servicios Armados, al afirmar que estaba "profundamente decepcionado por el manejo de la Administración sobre la situación en Panamá", añadiendo que Estados Unidos "debió ayudar a los rebeldes si se creía fuertemente que el general Noriega debía irse", y preguntado en una entrevista si los Estados Unidos deberían aumentar la presión para sacar a Noriega, dijo: "No creo que podamos esperar" (*The Washington Times*, octubre 4).

También el Senador Dennis DeConcini, miembro del Comité de Inteligencia, aprovechó la oportunidad para expresar que "la ayuda militar norteamericana a los insurgentes podría haber hecho la diferencia. Tenemos un ejemplo perfecto de qué pueden hacer los Estados Unidos aquí. Hay un gobierno electo en Panamá al que no se le permitió asumir el poder. Había una muy buena razón para actuar" (*The Washington Times*, octubre 4).

Siguiendo su conocida y vieja línea de oposición a los Tratados del Canal de 1977, el Senador Jesse Helms acusó a la Administración Bush de haber rechazado una petición de ayuda de las fuerzas rebeldes en un momento crítico y formuló una propuesta, que fue rechazada, "para autorizar al Presidente para usar la fuerza y sacar a Noriega, traerlo para que responda a los cargos de narcotraficante, restaurar el gobierno constitucional en Panamá y proteger el Canal". "Una vez más", concluyó Helms, "arrebataremos la derrota de las garras de la victoria" (*The Washington Post*, octubre 4).

En la Cámara de Representantes, las objeciones fueron igualmente punzantes. William Broomfield, miembro importante del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara, advirtió que "el fracaso en el golpe se verá como un gran error de política; debemos hacer lo que proceda para mostrar a los rebeldes nuestro apoyo; la ventana de la oportunidad que tenemos es muy pequeña y debemos tomar ventaja de ella y espero que no sea demasiado tarde" (*The Washington Times*, octubre 4).

Otro ejemplo de acusación fue dado por el Representante Gerald Solomon, al aseverar que "nosotros teníamos la oportunidad de entrar y ayudar a las fuerzas que trataban de derrostrar a Noriega. Estoy desconcertado porque no lo hicimos" (*The Washington Times*, octubre 4).

Fue el Senador Helms, como lo hemos visto, quien comenzó el mismo día del golpe a poner el dedo sobre la llaga, censurando a la Adminis-

tración Bush por rechazar una solicitud de ayuda formulada por los rebeldes. Indirectamente, estaba desmintiendo la negativa cerrada de la Administración, sobre que no tenían conocimiento del golpe frustrado.

Además de las críticas que se suscitaron en el Congreso norteamericano, ya en la noche del 3 de octubre algunos funcionarios del Departamento de Estado iniciaron, como es bastante usual entre ellos y la prensa de Washington, la filtración de informaciones especiales respecto de los contactos de la Administración Bush con los golpistas. Se dijo que éstos habían preguntado que si los Estados Unidos estaban preparados para recibir a Noriega como detenido, a lo que se les respondió afirmativamente. Pero otro funcionario trató de refutar la acusación implícita, explicando que los Estados Unidos presionaron infructuosamente a los rebeldes para obtener la entrega de Noriega. Estas versiones en las que apuntaban datos contradictorios obligaron al Sr. Marlin Fitzwater, vocero de la Casa Blanca, a ir más allá de su cerrada negativa del comienzo, aceptando el 3 de octubre en la noche que el Departamento de Justicia y la Administración Ejecutora de Drogas (Drug Enforcement Agency, DEA) habían sido alertados varios días atrás de la posible extradición de Noriega, después de que algunos funcionarios detectaron "rumores" acerca de un posible golpe. Fitzwater regresó a su negativa anterior, al añadir que "hemos oído antes, de estas informaciones, pero nunca se han concretado; no adoptamos ninguna acción que hubiera constituido injerencia directa" (*The New York Times*, octubre 4).

Otro elemento inquietante para los círculos de Washington se produjo en la noche del 3 de octubre, cuando el general Noriega compareció brevemente en un canal de la televisión panameña, y culpó a los Estados Unidos en la forma que sigue: "El incidente de esta mañana corresponde a la agresión y penetración permanente de las fuerzas de los Estados Unidos contra la tranquilidad de nuestro país" (*The New York Times*, octubre 4).

En razón de las fuertes críticas de varios congresistas, formuladas el día del golpe (3 de octubre), y como ya se había filtrado la información

sación informal que sostuvo el Secretario Cheney con número plural de congresistas, son las que siguen: la Administración Bush cree ahora que los rebeldes capturaron al general Noriega “por un breve período de tiempo”; “las gentes que estuvieron envueltos en el golpe no estaban allí como luchadores por la libertad”; “el jefe de la rebelión, mayor Moisés Giroldi Vera, puede ser considerado como persona indigna de confianza, quien podía estar intentando llevar a las fuerzas norteamericanas a una trampa”.

Cheney dio comienzo a una corriente de opinión contraria a los golpistas, pues un funcionario del Pentágono, quien pidió su anonimato, observó que “el levantamiento vino de las nubes y fue organizado por funcionarios de bajo nivel de las Fuerzas de Defensa panameñas”, agregando que el golpe había sido producto de rivalidades personales entre altos oficiales panameños de inteligencia militar y que el fracaso del movimiento no suspendería los siguientes esfuerzos de los Estados Unidos para impulsar a sus aliados en las Fuerzas de Defensa panameñas a una rebelión (*The Washington Times*, octubre 5).

Al comparecer en una entrevista con la CBS-TV, el Secretario Cheney confirmó que las Fuerzas de los Estados Unidos dieron asilo, horas antes del golpe, a la familia del jefe de la rebelión, pero que ello no daba apoyo siquiera indirecto a la misma; que hubo contactos entre los jefes militares norteamericanos en Panamá y oficiales rebeldes, mientras la acción se desarrollaba; se les dijo que podíamos relevarlos de la carga de Noriega y recibirlo, pero ellos expresaron claramente que no querían entregarlo, sino lograr que se retirara y pudiera vivir tranquilamente en Panamá (*The Washington Times*, octubre 5; *La Estrella de Panamá*, octubre 6).

Con mayor énfasis, el Secretario de Estado, James A. Baker III, explicó en la Colina del Capitolio que los Estados Unidos se habían mantenido a distancia porque los rebeldes tenían pocas posibilidades de éxito. “Si Ud. va a arriesgar vidas americanas, es el criterio del Presidente que ello se haga dentro de un plan propio. Ud. no lo hace sobre la base de los planes de cualquier otro” (*The Washington Times*, octubre 5).

No obstante, los esfuerzos desplegados por la Administración a fin de capear el temporal de críticas, tuvieron mediano éxito. El Representante Ike Skelton expresó que “fue una decisión consciente la de no actuar. Estoy furioso por ello” y agregó haber recibido información de un alto funcionario del Pentágono. La misma posición adoptó el Representante Dave McCurdy, miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara. Incluso algunos congresistas comentaron que había cierta similitud con lo ocurrido en la Bahía de Cochinos (invasión de cubanos anticastristas)

en 1961, "cuando el apoyo de los Estados Unidos se evaporó en el momento crucial" (*The Washington Times*, octubre 5).

Todavía el viernes 6 de octubre, el Secretario de Defensa Cheney asistió a una reunión, con los Comités senatoriales de Inteligencia y de Servicios Armados, para abundar en explicaciones, pero les recordó también las objeciones que los Legisladores habían formulado contra operaciones encubiertas en que hubiera pérdidas de vida o asesinatos, y especialmente hizo énfasis en que los Senadores objetaron, en julio de 1988, el plan que la CIA deseaba llevar a cabo con el oficial panameño Eduardo Herrera, a presión del Presidente Reagan, para derrocar a Noriega (*The New York Times*, octubre 9).

Otro aspecto llamativo, en la situación confrontada por la Casa Blanca el mismo día del golpe castrense frustrado, fue la de que, según declaraciones de algunos funcionarios, hubo desastrosas confusiones en la información que se recibía. En un comienzo no fue claro para el Departamento de Estado si los rebeldes habían capturado o no a Noriega (en Panamá tampoco se supo en dónde se encontraba el Narcodictador, sino al mediodía). El propio Secretario de Defensa, Richard Cheney, expresó el 5 de octubre, en una entrevista televisada, que la Administración había recibido "un enorme conjunto de datos poco claros" durante el golpe y que varios de ellos eran contradictorios. Los informes se recibían del Pentágono, del Departamento de Estado y del Consejo Nacional de Seguridad, lo que produjo una gran nube de incertidumbre. Hasta hubo un error de texto en un mensaje importante, pues el texto recibido por el Pentágono decía que los rebeldes "won't turn Noriega over" (no entregarían a Noriega), en tanto que el mensaje proveniente de la Embajada de Panamá y del Comando Sur expresaba que los rebeldes "want to turn Noriega over" (quieren entregar a Noriega) (*The New York Times*, octubre 6).

Las anteriores evidencias de falta de coordinación llevaron al Jefe de Staff de la Casa Blanca, John H. Sununu, a ordenar que se revisara toda la reacción de la Administración en cuanto al golpe militar, pues podía haberse dado un empastelamiento entre el Departamento de Estado, el Pentágono, la Casa Blanca y otras agencias oficiales, al punto de que Sununu tuvo diferencias con Brent Scowcroft, Consejero de Seguridad Nacional de Bush.

No faltaron severas críticas externas publicadas en los periódicos norteamericanos. Haynes Johnson, de *The Washington Post* (octubre 6), en artículo titulado *Paralyzed over Panama*, advierte que el problema fundamental de la Administración Bush, repetido en el golpe militar del 3 de

octubre, consiste en “una contradicción frecuente: de un lado, Estados Unidos mete ruido y lanza slogans acerca de mover activamente la guerra contra las drogas y los barones de la droga, y, por el otro lado, la inmovilidad práctica de los funcionarios norteamericanos, cuando se suscita una real prueba sobre aquella intención”.

En ese diario, el mismo día, Charles Krauthammer, con el título de *Bush's Failure in Panama*, afirma que “Bush no es el primer presidente que incita a una revuelta y después retrocede mientras que aquéllos que han sido alentados fueron destruidos”. El articulista recuerda el caso de Eisenhower y el levantamiento húngaro en 1956, que fue aplastado por los tanques soviéticos, y concluye así: “Para deponer a un pequeño tirano, Ud. debe tener algo más que desearlo. Un Presidente no es electo sólo para trazar metas. Está obligado a cumplir algunas de ellas también”.

El analista James McCartney, del Washington Bureau, del periódico *The Miami Herald*, publica el artículo denominado *Panama Coup Clearly Reveals The Two George Bushes* (10 de octubre), iniciándolo del modo siguiente: “Después de nueve meses, viene siendo claro que existen dos George Bush en la Casa Blanca. Hay el osado hacedor de discursos Bush, y hay el cuidadoso hacedor de políticas Bush. Los dos Bush son gemelos. Parecen iguales, pero tienen muy distintas personalidades. Su retórica es la de Reagan. Sus decisiones son puramente Jimmy Carter. Es fuerte en el hablar, pero débil en la acción. El último vívido ejemplo es la actitud del cauteloso Bush en el intento de golpe de Panamá”.

Hay muchos otros artículos de periodistas norteamericanos que siguen la misma línea de crítica acerba, y muy pocos alaban la prudencia omisiva de Bush con respecto al golpe militar del 3 de octubre. Bastan los ejemplos que acabamos de suministrar.

Un nuevo giro tomó la controversia entre los Congresistas y Bush, pues días más tarde, el 8 de octubre, Scowcroft (Consejero Nacional de Seguridad) y Boren (Presidente del Comité de Inteligencia del Senado) comparecieron por separado al mismo programa televisivo “*The Week*”, de la ABC News, y el primero le imputó al Congreso haber establecido límites para la Administración en cuanto “a la clase de acciones que ellos están diciendo ahora que nosotros debimos llevar a cabo”. Por su parte, Boren contestó que “a la Administración Bush se le había otorgado todo el dinero y la facultad que había solicitado para actividades relativas a Panamá”. Scowcroft se refería a una directriz presidencial de los tiempos del Presidente Gerald Ford, motivada por criterios del Congreso, conforme a la cual le estaba impedido a la Administración (CIA) intervenir en operaciones extranjeras que pudieran terminar en asesinatos de gober-

nantes. También aludió Scowcroft al caso de la Administración Reagan, de julio de 1988, cuando el Comité de Inteligencia del Senado desaprobó una operación encubierta que iba a dirigir el oficial panameño Eduardo Herrera contra Noriega (*The New York Times*, octubre 9).

Como culminación de toda esta controversia interna en la Administración Bush, el Presidente celebró, el viernes 6 de octubre, a primeras horas de la mañana, una reunión con Baker, Cheney, Scowcroft y Sununu, sumamente disgustado con la lectura de los periódicos de ese día, y ordenó a estos jefes que se suspendiera la crítica recíproca entre los funcionarios de los distintos Departamentos y Agencias del Gobierno, con respecto a la forma en que se había conducido la Administración respecto del frustrado golpe del 3 de octubre en Panamá (*The Washington Post*, octubre 11).

Las cosas no se detuvieron allí, pues el lunes siguiente, 9 de octubre, el mismo Bush celebró una reunión con el Comité de Inteligencia del Senado, para explicar ampliamente todo lo ocurrido, conjuntamente con sus principales funcionarios (Dan Quayle, Sununu, Scowcroft y Robert M. Gates, este último, funcionario de Seguridad Nacional). Y poco antes, el líder de la mayoría demócrata, Senador George J. Mitchell y el House Speaker (vocero de la Cámara), Thomas Foley, también demócrata, aceptaron las seguridades de la Administración, de que no hubo oportunidad para traer a Noriega a los Estados Unidos y no censuraron la conducta del Presidente Bush. (*The New York Times*, octubre 8).

Lo cierto es que el saldo de todas estas críticas, reuniones y declaraciones televisivas contradictorias, fue favorable a Bush, pues la mayoría de los críticos oficiales terminaron aceptando que le fue muy difícil al Presidente tomar una decisión intervencionista, dadas las circunstancias contradictorias y confusas. Pero esta conclusión no es muy compatible con el hecho conocido de que el General Colin Powell, Presidente de los Jefes de Estados Mayores, comunicó al General Maxwell Thurman, del Comando Sur en Panamá, la autorización dada por el Presidente Bush para detener a Noriega, incluso con intervención de tropas norteamericanas, lo que ocurrió cuando ya el golpe estaba prácticamente sofocado (*The Miami Herald*, octubre 10). ¿Por qué no se pudo dar esa autorización algunas horas antes?

Un ángulo marginal de esta nutrida y accidentada controversia de funcionarios en el Gobierno de los Estados Unidos, fue la imputación del Pentágono respecto de las fallas del golpe frustrado. Desde el día del golpe, algunos funcionarios norteamericanos expresaron vagos temores de que los informes previos recibidos, bien podrían llevar a Norteamérica

a una trampa urdida por Noriega para comprometer públicamente a los Estados Unidos. También, otros funcionarios expresaron que el golpe tenía pocas probabilidades de éxito. Pero estas censuras fueron más pronunciadas cuando algunos oficiales rebeldes llegaron a Miami, el sábado 7 de octubre, pues se temía que estos oficiales criticaran la actuación de los Estados Unidos. En efecto, Pete Williams, vocero del Pentágono, pintó un cuadro de extraordinario desorden entre los rebeldes, al afirmar que “el golpe había sido mal planeado y los rebeldes estuvieron desorganizados y confusos” (*The New York Times*, octubre 11). Otros funcionarios dijeron que “el complot fue trazado con cálculos errados, expectativas no realistas e incompleto planeamiento” (*The Washington Post*, octubre 11).

Para valorar debidamente la actuación del Presidente Bush y demás funcionarios en Washington, el 3 de octubre, conviene tener en cuenta algunas de las actividades desarrolladas por ellos en los momentos cruciales o de desarrollo de la rebelión. Aunque nos repetimos en algunos detalles, veámoslo.

Fue algo coyuntural, aunque paradójico, que el General Colin Powell se hubiera encargado del puesto de Presidente de los Jefes de Estados Mayores, el domingo 1o. de octubre, y que el General Maxwell Thurman se encargara del Comando Sur el sábado 30 de septiembre, pues sin haberse enterado de la rutina o mecánica de sus puestos, ya se verían enfrentados al estallido de la rebelión Giroldi. Oficiales allegados a Thurman, jefe del Comando Sur, expresaron que después de escuchar los insípidos y displicentes informes de los dos funcionarios de la CIA que hablaron con Giroldi el domingo 1o. de octubre, Thurman consideró como probable que Noriega, a través de Giroldi, le estaba tendiendo una trampa.

A las dos y treinta de la madrugada del lunes 2 de octubre, el General Colin Powell recibió la información de que el mayor Giroldi había hablado con agentes norteamericanos, revelándoles su plan de insubordinación y solicitando cierta ayuda. Inmediatamente llamó por teléfono al Secretario de Defensa Richard Cheney, y éste a Brent Scowcroft, Asesor de Seguridad Nacional del Presidente Bush. Los tres convinieron en dar el refugio solicitado por la familia de Giroldi, decidiendo no llamar en seguida al Presidente, sino informarle en horas de la mañana.

El golpe se daría, según Giroldi, el lunes 2. Previa la información del caso, Bush decidió reunirse esa mañana con Cheney, Scowcroft, Powell y Baker, este último, Secretario de Estado, a fin de recibir noticias sobre los probables acontecimientos en Panamá. No obstante, aguardaron hasta las diez de la mañana, sin que nada se hubiera producido. Allí sur-



gieron algunas aprensiones con respecto a Giroldi, porque no era un oficial muy conocido y porque había encabezado, como amigo allegado a Noriega, la liquidación, en su cuna, del intento de golpe del 16 de marzo de 1988. Hasta Cheney se refirió a la posibilidad de que Giroldi pudiera montar una trampa, con el objeto de hacer incurrir a las tropas norteamericanas en actos comprometedores, que posteriormente podían ser denunciados ante la comunidad internacional.

Ya a las ocho y cincuenta de la mañana del martes 3 de octubre el Presidente Bush fue informado de los tiroteos que ocurrían en el Cuartel Central, y el Secretario Baker debía conversár preliminarmente con el Presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, como antesala de la reunión de éste con Bush, que se hizo en horas de la mañana.

Fue a las nueve y treinta, cuando Bush pudo reunirse con varios de sus más altos funcionarios y asesores, para revisar los sucesos de Panamá, mas el Secretario de Defensa Cheney no pudo asistir, porque se había ido al campo de batalla de Gettysburg, para una visita al lugar histórico con el Ministro de Defensa soviético, Dimitri Yazov. Tampoco asistió William Webster, el Director de la CIA, posiblemente porque no fue llamado.

Ya sabemos que los informes que se recibían en la Oficina Oval, eran fragmentarios y provenían de varias agencias: el Pentágono, la Embajada de Panamá, el Comando Sur, el Departamento de Estado. Nadie informaba en dónde se encontraba Noriega. En tales circunstancias de confusión, nada pudo ser decidido inmediatamente. A las once y treinta de la mañana, el Presidente se reunió por segunda vez, con su equipo, y la incertidumbre no aminoraba, pues hasta disponían del mensaje contradictorio sobre que a Noriega lo querían o no lo querían entregar (*The Miami Herald*, octubre 7). Pero en esta ocasión dio la orden de bloqueo de carreteras.

A la una y media de la tarde, Bush celebró una tercera reunión, y pocos minutos después llegó el Secretario Cheney con el Ministro soviético Yazov, a quien dejaron en la sala de espera, durante 30 minutos, mientras Bush podía recibirlo. En esta oportunidad Cheney, al estar con Bush, Scowcroft, Powell, Baker y Sununu<sup>5</sup> se refirió a la reunión de Cisneros con Licona en Fort Clayton. Se dio la autorización para que el Comando Sur procediera a la captura de Noriega, aunque hubiera que usar tropas (*La Estrella de Panamá*, octubre 9), pero siendo las dos y

<sup>5</sup> No se pudo consultar a Everet Ellis Briggs, funcionario de carrera, ex Embajador en Panamá en 1983, porque unos cuantos días antes había renunciado a su puesto en la Seguridad Nacional por diferencias con el Secretario James Baker (*The New York Times*, octubre 10).

quince minutos de la tarde llegó Bernard Aronson, Asistente para Asuntos Latinoamericanos, con la información de que el golpe había fracasado, lo que fue comunicado a Cheney cuando a esa hora regresaba al Pentágono con Yazov, en automóvil (*The New York Times*, octubre 8). En los días siguientes, en una de sus numerosas explicaciones, el Presidente Bush declaró: “no usé la fuerza militar porque ello no estaba garantizado bajo las circunstancias existentes” (*The Miami Herald*, octubre 7).

Todo el rejuego de críticas, hacia adentro y hacia afuera del Gobierno de los Estados Unidos, que hemos relatado, en torno al golpe militar del 3 de octubre, todo ese rejuego, reiteramos, tuvo efectos muy importantes en Norteamérica. En primer lugar, hubo una consecuencia política, porque predispuso a la Administración Bush para no continuar “jugando” al derrocamiento de Noriega. La próxima vez, la cosa iría en serio, de verdad. Y la consecuencia jurídica fue la de que se revisó, entre la Administración y el Congreso, el significado, la interpretación, de la Orden Ejecutiva No. 12333, expedida por el Presidente Gerald Ford en 1976, por virtud de la cual se prohibió que el Gobierno norteamericano tuviera injerencia en acciones conducentes a la muerte de un gobernante extranjero. Los sucesores presidenciales de Ford han mantenido y aplicado la mencionada Orden Ejecutiva No. 12333.

El actual Director de la CIA, William H. Webster, solicitó, a mediados de octubre de 1989, que se revisara la forma en que el Congreso y el Ejecutivo han aplicado la Orden mencionada. El Sub-Procurador General de los Estados Unidos, General William P. Barr, redactó el memorandum clarificador de la aplicación de dicha Orden Ejecutiva. El Departamento de Estado, el Pentágono, el Departamento de Justicia, la CIA y la Casa Blanca revisaron el memorandum antes de que fuera remitido a los Comités de Inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes. La nueva interpretación se refiere a que la prohibición de injerencia de los Estados Unidos en asesinatos de dirigentes extranjeros no impide que la CIA intervenga en un complot que indirectamente pueda conducir a la muerte de una figura política extranjera, según ha explicado el Director Webster. En las informaciones periodísticas sobre el memorandum interpretativo a que se alude, se indica que en las operaciones encubiertas permitidas es posible la participación de tropas norteamericanas. Ese memorandum fue enviado al Senado y a la Cámara a comienzos del mes de noviembre (*The New York Times*, octubre 25; *The Washington Post*, noviembre 17).

Además, como una consecuencia práctica directa de este acuerdo intergubernamental, el periódico *Los Angeles Times*, del 16 de noviembre,

informó que se había aprobado un nuevo plan de acción contra Noriega, entre el Presidente Bush y el Senado, con el nombre de *Panamá-5*, conforme al cual se destinaban tres millones de dólares para una operación encubierta de la CIA en Panamá, a fin de interesar a oficiales de las Fuerzas de Defensa panameñas en el derrocamiento de Noriega, sin que se tratara expresa o tácitamente de la muerte de este último (*The New York Times*, 17 de noviembre). Es útil preguntarse cómo se filtran tan fácilmente en Norteamérica estas “operaciones encubiertas”, y lo cierto es que ello ha ocurrido varias veces. Pero en este caso, la extrema facilidad de filtración hacía sospechar que podía tratarse de una cortina de humo y que el rumbo de los acontecimientos sería muy distinto al de un derrocamiento personal de Noriega, como efectivamente sucedió.

## X. Saldo negativo para Noriega

A pesar del fracaso de la rebelión Giroldi, la misma creó un asituación de efectos muy desfavorables para Noriega, si hacemos a un lado el hecho de que hubiera salvado la vida y retenido parte de su poder, lo que era, en la superficie, un triunfo para el Narcodictador.

Después de la intentona fallida de marzo de 1988, resultaba evidente que el prestigio de Noriega, hacia adentro de las Fuerzas de Defensa, se había menoscabado en forma considerable, pues demostró que número plural de importantes oficiales (16) ya se había decidido a liquidar la Narcodictadura. A ello se agrega que la prisión y las persecuciones noriegaístas contra ese grupo de altos oficiales fue alimentando un sordo repudio en su contra, en las filas del ejército panameño.

Ahora, la continuidad del Narcodictador en el poder había exigido un episodio sangriento de lucha armada, dentro de las mismas Fuerzas de Defensa. Lo más preocupante para Noriega fue que pudo aflorar un desacuerdo abierto en su contra, nada menos que de la Inteligencia Militar y de toda la Compañía Urraca, que custodiaba la seguridad del Cuartel Central, el que siempre fue su centro de operaciones predilecto y necesario. La lealtad del ejército hacia la persona del Narcodictador y supuesto líder del anti-imperialismo quedó muy en entredicho, pues muchos “leales” lo fueron de última hora, cuando no quedó más remedio que plegarse al grupo interno reducido de jefes que en un comienzo decidieron defender a Noriega.

Por otra parte, el infame asesinato de los jefes de la revuelta y de número considerable de soldados, presentaba a Noriega y a su círculo

de allegados como un grupo cruel y vengativo en extremo, lo que convencía al resto de las Fuerzas de Defensa sobre la clase de jefe máximo y de círculo allegado que ahora continuaban como tales, con más saña y sin par desconfianza, sobre todo en el caso de Noriega, pues era imposible que pudiese creer tranquilamente en ninguno de sus "leales", aunque continuara valiéndose de ellos.

La rebelión fracasada de Giroldi obligó a Noriega a lanzarse por el camino de las medidas de emergencia, con las que intentaba desesperadamente recubrir de fuerza un poder político en abierta crisis. La purga en el ejército fue grande, y lo fue menos en los cuadros burocráticos estatales, pero éstos quedaron amenazados. Así, cada vez era más y más estrecho el círculo de apoyo humano, que rodeaba al Narcodictador, y éste quedaba más y más acorralado. Su ejército fue atravesado por una cruenta división y su séquito burocrático reducido a una escuadra de paramilitares sanguinarios, que controlaban al resto del personal gubernativo.

A decir de personas enteradas, desde la intentona frustrada de marzo de 1988, Noriega se dedicaba más y más al exceso alcohólico. Hizo permanente y diaria su práctica de no dormir en el mismo lugar. Sólo confiaba en la comida preparada por la madre de una amiga íntima. Después del golpe sangriento encabezado por Giroldi, se le notaba más deprimido y, a la vez, más aficionado al alcohol (*Newsweek*, enero 1o. de 1990). Su psicopatía, necesariamente, iba en aumento.

## **XI. Perfil de la rebelión Giroldi**

Hay aspectos relevantes de la sangrienta insurrección fracasada que encabezó Moisés Giroldi, los cuales son de útil consideración.

a) Desde la anulación de las elecciones, el 10 de mayo, el Presidente Bush exhortó varias veces a la oficialidad de las Fuerzas de Defensa, para que se deshicieran del Narcodictador, indicando que la oposición de los Estados Unidos no era contra dichas Fuerzas, sino contra Noriega, según fue publicado por la prensa norteamericana, como lo hemos anotado en esta *Sexta Parte*.

Por otro lado, los agentes de la CIA en Panamá siempre estuvieron estimulando las posibles rebeliones internas en el ejército panameño, aunque se desconocen los detalles, por tratarse de situaciones encubiertas y secretas. Las relaciones entre la oficialidad panameña y los jefes principales y secundarios del Comando Sur eran, incluso, formales, en razón

del cumplimiento del Tratado del Canal, lo que permitía todo tipo de entropes, hasta personales (ello también ocurrió con la CIA).

Sin embargo, es sorprendente que las conversaciones de Giroldi con dos funcionarios de la CIA, cuarenta y ocho horas antes de la rebelión, fueran establecidas con agentes que, en lo personal, carecían de la posición jerárquica adecuada para formalizar tratos con Giroldi.

Fue muy desfavorable que el nuevo jefe del Comando Sur, general Maxwell R. Thurman, tomara posesión de ese cargo el sábado 30 de septiembre, a tres días del hecho, pues no se sintió con el conocimiento necesario para actuar de acuerdo con las exigencias de las circunstancias y hasta llegó a suponer, en la mañana del 3 de octubre, conforme a versiones de sus allegados, que Noriega podía estar urdiendo una trampa, una falsa rebelión, para que Norteamérica fuese exhibida internacionalmente. Esos temores falsos llegaron hasta Washington.

A propósito de Washington, Colin Powell, Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas norteamericanas, también acababa de tomar posesión de su nuevo cargo entre los Jefes de Estados Mayores y aunque había sido Consejero de Seguridad Nacional de Reagan, tampoco estaba al tanto directo de los sucesos panameños, lo que hubo de ser factor de algún peso en la omisiva actitud del Gobierno norteamericano, respecto de la insurrección Giroldi.

b) La plana mayor de la Casa Blanca y del Pentágono se escudó mucho en la prohibición establecida por el Gobierno de Gerald Ford, a presiones del Congreso, para que la CIA y otras agencias norteamericanas no se mezclaran en rebeliones o insurrecciones políticas o militares que pudieran conducir a la muerte de gobernantes extranjeros. Con esa prohibición explicaron su actitud pasiva el 3 de octubre y la subrayaron increpando a los que criticaban desde el Congreso, que en julio de 1988 el Comité Senatorial de Servicios Armados vetó los preparativos de la CIA, con el oficial panameño Eduardo Herrera, para derrocar al Narcodictador, porque no se pudo garantizar que Noriega quedaría con vida.

La ausencia de información precisa, antes y durante la rebelión Giroldi, por parte de la CIA y del Comando Sur, en Panamá; las confusiones por la profusión de Departamentos que enviaban y recibían informaciones en y para Washington, el 3 de octubre, y algunos otros elementos semejantes, no justifican, en modo alguno, que el Gobierno de los Estados Unidos no hubiera adoptado la más escasa medida de ayuda (incluso indirecta pero efectiva, como cerrar las vías de acceso al Cuartel Central, e impedir vuelo de aviones desde Río Hato, o su aterrizaje en los dos aeropuertos de la ciudad de Panamá), para que

tuviera éxito la rebelión, aún después de iniciada. Desde mayo de 1989, las tropas norteamericanas habían venido efectuando ejercicios, maniobras, simulacros, etcétera, en toda el área canalera y en lugares de indisputada jurisdicción panameña. Nada les impedía efectuar una incursión más, un bloqueo más (y bloquearon dos vías de acceso, pero dejaron libres otras el 3 de octubre). No es que seamos partidarios de la invasión o de la intervención norteamericanas, sino que subrayamos lo que hicieron por meses y lo que no hicieron en unas cuantas horas. Precisamente, parece claro que de haber actuado con simples medidas de prevención, tal vez los Estados Unidos se habrían ahorrado la inmensa tragedia de haber invadido y ocupado a Panamá, militarmente, dos meses y medio después. En estas líneas, no somos profetas del pasado. Lo único positivo de la invasión norteamericana fue que el creador aplastó a su propio monstruo. Que el lector elabore sus propias conclusiones, respecto de lo que hicieron y no hicieron los Estados Unidos en el caso de la rebelión Giroldi.

c) En su primera etapa de ejecución, los insurrectos, especialmente Giroldi, planearon y actuaron acertadamente. Lograron su objetivo de capturar a Noriega y al Estado Mayor, apoderándose del Cuartel Central. Con la experiencia de la intentona frustrada de Leonidas Macías y otros oficiales, el 16 de marzo de 1988, sobre todo por los vejámenes y torturas que sufrieron ellos, y por las advertencias de Noriega a futuros conspiradores, los nuevos insurgentes sabían que arriesgaban sus vidas. Notoriamente, fallaron al carecer de metas claras, para la segunda etapa: liquidar a Noriega o entregarlo rápidamente al Comando Sur, cuyas oficinas principales sólo estaban a quinientos metros. El inútil e ingenuo parlamento con Noriega, para que se retirara de la Comandancia, y la falta de compromisos categóricos con el Comando Sur, los llevaron al fracaso y a la muerte inmediata, a un asesinato frío y despiadado.

ch) La *Proclama* que leyeron los rebeldes a última hora, por Radio Nacional, repetida por Radio Exitosa, plagada de errores político-estratégicos, no iba a influir en modo alguno, en cuanto a un apoyo popular. La realidad social era la de que el pueblo panameño (los sectores populares, la clase media y sobre todo la burguesía) estaba aterrorizado por la represión de la Narcodictadura y nadie se decidió a actuar, además y principalmente, porque había desconfianza instintiva en un movimiento armado interno, que nunca hizo contactos para inducir a un posible apoyo de grupos externos. No obstante, pese a que se trataba de elementos de las Fuerzas de Defensa, los insurrectos lavaron con su propia sangre cualquier mancha que hubieran tenido y los nombres de esos asesi-

nados, en número crecido y de los que están vivos (oficiales y tropas), merecen el reconocimiento del pueblo panameño, porque lucharon y porque varios murieron, por derrocar al Narcodictador que, una vez más, engañó prometiendo respetar sus vidas, para ordenar horas después tan horribles asesinatos.

## **XII. Los asesinos asilados y enjuiciados**

Al producirse la invasión norteamericana del 20 de diciembre de 1989, el aplastamiento de las Fuerzas de Defensa panameñas trajo por consecuencia que muchos oficiales del ejército se ocultaran y pocos días después algunos de ellos buscaron refugio, como asilados, en Embajadas latinoamericanas. Tal fue el caso de Asunción Gaytán, jefe de escolta de Noriega, quien con éste se asiló en la Nunciatura Apostólica; de Heráclides Sucre, quien se refugió en la Embajada del Perú; de Gonzalo González, también asilado en esta última Embajada.

Gaytán, Sucre y González han sido sindicados como ejecutores de rebeldes, el 4 y 5 de octubre. Por el mismo delito se enjuicia al ex-capitán Ramón Díaz. Sucre y este último son acusados del asesinato de Moisés Giroldi, y Gaytán lo es por la muerte de cinco rebeldes, ejecutados por él en un hangar de la Base militar de Albrook Field, en las cercanías del Canal. Otro de los asesinos en este último lugar fue Gonzalo González.

El 31 de diciembre de 1989, el Procurador General de la Nación, Lic. Rogelio Cruz, declaró a la prensa que “el general Manuel Antonio Noriega, hoy refugiado en la sede de la Nunciatura Apostólica, será citado entre hoy o mañana martes a mi despacho, y se estima que le serán formulados cargos relacionados con la muerte de diez de los once militares que fueron asesinados luego del intento de golpe militar del 3 de octubre de 1989; que su despacho pedirá que se entregue a Panamá al general Noriega”, agregando: “Vamos a pedir el llamamiento a juicio del general Manuel Antonio Noriega y que se nos entregue” (*La Estrella de Panamá*, enero 1o. de 1990). Es sabido que Noriega optó por entregarse a la Agencia de Represión de Drogas norteamericana (DEA), ante el silencio cómplice del Gobierno panameño.

Hasta la fecha, es decir, después del curso de ocho meses, Gaytán, Sucre y González continúan asilados, porque el Gobierno panameño se ha negado a expedirles salvo conductos como asilados políticos. No obs-

tante, la Nunciatura y la Embajada del Perú continúan protegiéndolos como tales.<sup>6</sup>

Las primeras informaciones sobre los responsables de los asesinatos del 4 y 5 de octubre las suministraron personas detenidas o simples testigos que declararon ante funcionarios de inteligencia militar norteamericana, ya que fue el ejército de los Estados Unidos, al producirse la invasión, el que detuvo e interrogó a varios de los ejecutores. Posteriormente, las autoridades panameñas del Ministerio Público han abierto y adelantado los expedientes relativos a tales fusilamientos. Pero todavía se discute diplomáticamente lo relacionado con el asilo de González, Sucre y Gaytán, sin que se vislumbre aún la posibilidad de un entendimiento.

Heráclides Sucre tenía antecedentes criminales, pues se le ha acusado, en los últimos meses, de haber participado el año de 1983 en la muerte de nueve detenidos en la Isla Penal de Coiba (*Crítica Libre*, enero 30 de 1990). La ejecución o fusilamiento de los rebeldes que se sublevaron el 3 de octubre, por parte de oficiales y soldados de las Fuerzas de Defensa, que recibieron órdenes de Noriega, demuestra que el Narcodictador se había rodeado de un séquito de asesinos inmisericordes.

Ramón Díaz, en su testimonio judicial, ha intentado eximirse de responsabilidad, explicando que cuando él le hizo un disparo a Giroldi, éste yacía muerto, y que fue Heráclides Sucre quien le segó la vida con una ráfaga de ametralladora y le gritó a Díaz que le disparara también. Agrega Díaz que lo hizo por temor de que Sucre le disparara a él y que optó por un disparo que no podía ser fatal (*El Panamá-América*, febrero 21 de 1990 y *El Diario Independiente*, septiembre 8 de 1990).

Con declaraciones oficiales de testigos y de ejecutores se ha conocido que Giroldi fue llevado en helicóptero al caer la tarde del 3 de octubre al Cuartel de Tinajita, recluido en una celda pequeña, ampliamente indagado y torturado (Díaz y después el mayor Miranda fueron los interrogadores); algo después de las cuatro de la mañana, es decir, ya en horas del 4 de octubre, Sucre y otros le ordenaron que subiera a un carro, y al dar la espalda Giroldi, Sucre lo ultimó (*El Diario Independiente*, septiembre 8 de 1990).

<sup>6</sup> Asunción Eliécer Gaytán, ex jefe de escolta de Noriega en los últimos tiempos de la Narcodictadura, desapareció "misteriosamente" de su asilo en la Nunciatura Apostólica, entre el viernes 14 de septiembre en la noche y el domingo 16 de septiembre de 1990 en la madrugada, sin que nadie en la Nunciatura pudiera explicar tan insólito hecho. La vigilancia policial era casi nula y no fue difícil para un hombre tan astuto y entrenado como Gaytán evadirse del modo sigiloso en que lo hizo. Meses antes de su "fuga", él mismo declaró a los periódicos que hubiera preferido caer combatiendo que entregarse. En la próxima *Parte* nos referiremos al "misterio" de esta "fuga".



Aunque el cadáver de Girolodi fue “entregado” a su madre; y hay fotos de ella dándole la despedida en el ataúd, todavía a fines de febrero de 1990 su viuda Adela Bonilla de Girolodi ignoraba, realmente, en qué lugar había sido sepultado y suponía que lo enterraron en Pacora (*El Siglo*, febrero 23 de 1990). El cadáver del desdichado Girolodi fue llevado a la morgue del Hospital Santo Tomás; pero a las seis de la mañana del 4 de octubre el Procurador General de la Nación, en ese momento el Lic. Carlos Villalaz, uno de los mayores esbirros de Noriega, ordenó el regreso del cadáver al Cuartel de Tinajita, según lo ha explicado el actual Procurador General, Lic. Rogelio Cruz, y Villalaz encomendó al Fiscal Auxiliar, Lic. Mario Ballesteros, que hiciera la diligencia del levantamiento (*La Prensa*, enero 13 de 1990). El Lic. Ballesteros ha confirmado lo esencial de la explicación del Procurador Cruz, así como otros detalles de las ejecuciones llevadas a cabo en el hangar de Albrook Field (*La Estrella de Panamá*, marzo 1o. de 1990).

Otro caso espeluznante fue el del capitán Nicasio Lorenzo, al cual ya nos hemos referido, debiendo agregar ahora que su viuda, Luz de Lorenzo, ha declarado que un militar amigo le llamó el 6 de octubre, para darle un mensaje de su esposo, quien la avisaba que “estaba vivo y que no le habían hecho nada” (*La Prensa*, febrero 22 de 1990). Dos días después, el 8 de octubre, le informaron que su esposo Lorenzo se había “suicidado” en su celda y le hicieron entrega del cadáver.

A cinco de los rebeldes los llevaron en helicóptero al hangar de Albrook Field, en la cercanía del Canal (Balboa), como a las cinco de la tarde, encapuchados y esposados. Asunción Eliécer Gaytán, Francisco Ávila, Aristides Córdoba y Sergio González dispararon sus pistolas de nueve milímetros sobre las víctimas, mientras Lenin Miranda portaba un fusil AK-47. Este último condujo el vehículo que retiró a los ajusticiados del lugar. A las ocho de la noche, Ávila y Córdoba trajeron dos encapuchados más, quienes también estaban esposados. Se escucharon detonaciones fatales. A las cuatro de la mañana del 4 de octubre, aparentemente tres detonaciones segaron la vida de Eric Murillo. Estos fueron los ejecutados en Albrook Field (*La Prensa*, julio 5 de 1990).

El asilo diplomático de varios asesinos del 4 y 5 de octubre, en la Embajada del Perú y en la Nunciatura Apostólica, y el aviso de que se estaba tramitando un salvoconducto en favor de ellos, para que viajaran como asilados al extranjero, suscitó piqueteos y protestas de las viudas, familiares y numerosos particulares, ante las respectivas Embajadas y ante la Procuraduría General de la República.

Un mes antes, el Nuncio Apostólico Sebastián Laboa había hecho una extraña defensa de Asunción Eliécer Gaytán, explicando que su participación en las ejecuciones “no se configura como un asesinato; hubiera podido pertenecer a un pelotón de ejecución, eso es algo que pudo ocurrir por órdenes emanadas de arriba o producto de un juicio sumarísimo” (*El Panamá-América*, enero 22 de 1990). Pero el Fiscal Ballesteros ha narrado que Gaytán retiró de la fila de rendidos, aún en el Cuartel Central, al sargento Diócleles Julio, y se lo entregó al sargento Aristides Córdoba, quien lo condujo a la parte del fondo del Cuartel y le dio un tiro en la frente, con su pistola de nueve milímetros.

La tesis apostólica insinúa la eximente de “obediencia debida”, contemplada por el artículo 34 de la Constitución Nacional y el artículo 35 del Código Penal, normas que debemos revisar.

“*Artículo 34.* En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional o legal, en detrimento de alguna persona, el mandato del superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta. Se exceptúan los miembros de la Fuerza Pública cuando estén en servicio, en cuyo caso la responsabilidad recae únicamente sobre el superior jerárquico que imparta la orden” (Constitución).

“*Artículo 35.* No es culpable quien obra en virtud de obediencia debida, siempre que la orden emana de una autoridad competente para expedirla y esté revestida de las formalidades legales, que el agente esté obligado a cumplirla y que no tenga el carácter de una evidente infracción punible. Se exceptúan los miembros de la Fuerza Pública cuando estén en servicio, en cuyo caso la responsabilidad recaerá únicamente sobre el superior jerárquico que imparta la orden”. (Código Penal).

Se advierte que el Código Penal repite textualmente la excepción contenida en el precepto constitucional, en beneficio de los miembros de la Fuerza Pública. Pero a quien ordenó las ejecuciones de los rebeldes (Noriega, por ejemplo; u otros de su séquito), lo mismo que a los ejecutores materiales de los asesinatos, no se les puede aplicar la exención de la “obediencia debida”, entre otras razones jurídicas, porque textualmente ésta procede “*cuando estén en servicio*”. Fue un asesinato y los culpables deben purgar su delito. ¿Cómo enjuiciarán los tribunales panameños, en esta causa, al Narcodictador, si el Gobierno panameño fue cómplice de su entrega al ejército norteamericano, a la DEA y a los juzgados federales de Tampa y Miami?

Todavía no es fácil hacer la lista de los ejecutores norieguistas, cuando las investigaciones judiciales siguen con carácter reservado. Pero la prensa menciona los nombres de Heráclides Sucre, Gonzalo González,

Asunción Eliécer Gaytan, Ramón Díaz, Evidelio Quiel, Camilo Vega, Lenin Miranda (*Crítica Libre*, febrero 27 de 1990), Francisco Ávila, Edgard A. Maldonado, Aristides Córdoba y Sergio González (*La Prensa*, julio 5 de 1990).

Y tampoco se conoce el número total de personas ajusticiadas, a causa de la sangrienta rebelión del 3 de octubre. Entre ellos lo fueron: Moisés Giroldi, León Tejada, Edgardo Sandoval, Jorge Bonilla, Juan Arza, Francisco Concepción, Ismael Ortega, Dióclides Julio, Feliciano Muñoz, Eric Murillo y Nicasio Lorenzo. Tales oficiales y soldados panameños pagaron con su vida el decidirse por el derrocamiento del Narcodictador. Y a pesar de que todo indica que su actuación estuvo limitada por el estrecho horizonte de salvaguardar los intereses de las Fuerzas de Defensa como institución castrense hegemónica en el país, también se rebelaron a costa de sus propias vidas, porque se hicieron eco del desastre interno y nacional a que estaba llevando la nefasta continuidad de la Narcodictadura y del Narcodictador. La jactancia y el desafío de éste frente al ejército norteamericano acantonado en las bases militares del Canal, con las maniobras y amenazas que desarrollaba ese ejército, constituían un gravísimo riesgo, que la rebelión Giroldi intentó sangrienta y frustradamente conjurar.

